

Abril 27 de 1966

53ª REUNION — 5ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor CARLOS H. PERETTE, vicepresidente de la Nación

Secretarios: señores CLAUDIO A. MAFFEI y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

Prosecretarios: señores DELFOR W. CARESSI y RAFAEL ARANCIBIA

SENADORES RESENTES:

ABDALA, Felipe
ACUNA Ernesto N.
ACUNA Ramón Edgardo
AGUIAR VAZQUEZ Américo Angel
AGUIRRE LANARI Juan R.
BAUDUCCO José Raúl
BLANCO Rubén V. M.
CANTONI Aldo H. N.
CASTIGLIONE José F. L.
FASSI Santiago Carlos
FERNANDEZ (h.) Mariano
FLORES Domingo
FREYTES Angel R.
GADANO José Enrique
GAMOND, Eduardo José Agustín
GELSI Celestino
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
GONZALEZ FUNES, Tomás
LOPEZ Jorge Oscar
LUBARY Ginés A.
MANCINI, Galileo
MARTINEZ José Alberto
MARTINEZ GARBINO Lucio José
MARTINEZ SARAVIA Miguel A.
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO Rolando
RISPOLI ROMAN Enrique G.
RODRIGUEZ Eugenio L.
SALMEN, Miguel
TARDELLI Antonio
VARELA DIAZ, Diógenes

AUSENTES, CON AVISO:

ABDALA, Demetrio César
ASTUDILLO Félix E.
BARBICH Adolfo A.
BASSI, Ricardo Alberto
BERNARDO, Miguel Angel
CAPRARO Francisco
CORRADI, Luis Mauricio
DE REGE, Roberto
LOVAGLIO Dante A.
OVANDO, Ricardo
RAMIREZ Laure Francisco
SAPAG Elias
VITTI Alfonso Andrés

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre donación de un ómnibus a la Asociación Cooperadora del Hogar Taller para Ciegos Julián Baqueros. (Página 3300.)
- II.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación. (Página 3300.)
- III.—Comunicaciones oficiales. (Página 3300.)
- IV.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 3301.)
- V.—Dictamen de comisión. (Página 3304.)
- VI.—Peticiones particulares. (Página 3304.)

VII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Salmén, Astudillo y Bernardo sobre sanciones impuestas al personal por la Comisión Administradora de Emisoras Comerciales y LS 82 TV Canal 7. (Página 3305.)

VIII.—Proyecto de ley del señor senador Olmedo sobre modificación de los artículos 201 y 206 de la ley de quiebras. (Página 3305.)

IX.—Proyecto de comunicación del señor senador Rispoli Román sobre otorgamiento de créditos a profesionales universitarios. (Página 3305.)

X.—Proyecto de comunicación del señor senador Olmedo sobre transferencia de subsidios para auxiliar a los damnificados por las inundaciones. (Página 3306.)

XI.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Olmedo y Rodríguez sobre construcción del aeropuerto de Cataratas del Iguazú. (Página 3306.)

2.—Decreto de los presidentes de ambas Cámaras designando una Comisión Bicameral de Homenaje al Sesquicentenario del Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia. (Página 3309.)

3.—Mociones de preferencia. (Página 3310.)

4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley, en revisión, sobre contratos de trabajo. Se aprueba. (Página 3311.)

5.—Apéndice:

Sanción del Honorable Senado. (Página 3325.)

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de abril de 1966, a la hora 17 y 55, dice el

Sr. Presidente. — Habiendo número en el recinto, se declara abierta la sesión.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Donación de un ómnibus a la Asociación Cooperadora del Hogar Taller para Ciegos Adultos Julián Baqueros. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 18 de abril de 1966.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo nacional tiene el agrado de dirigirse a vuestra honorabilidad con el objeto de remitir un proyecto de ley por el cual se faculta a la

Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA) —empresa del Estado— a transferir sin cargo a la Asociación Cooperadora del Hogar Taller para Ciegos Adultos Julián Baqueros de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, un ómnibus marca Volvo, motor 1.411.176, chasis 120-5.279.

Tal donación le fue solicitada a esa empresa del Estado por dicha entidad para ser destinado al transporte de los ciegos concurrentes al mismo.

Atento a la evidente finalidad de bien público a que será destinado el automotor de referencia, la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA) —empresa del Estado— accediendo a lo solicitado remite a vuestra honorabilidad el proyecto de ley correspondiente.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.

Leopoldo Suárez. — Mario Romanelli.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Facúltase a la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA) —empresa del Estado— a transferir sin cargo a la Asociación Cooperadora del Hogar Taller para Ciegos Adultos Julián Baqueros de la ciudad de Córdoba —provincia de Córdoba— un ómnibus marca Volvo equipado con motor 1.411.176, chasis 120-5279, cuyo valor es de ciento veinte mil pesos (\$ 120.000).

Art. 2º — Considérese la antedicha donación como cesión de bienes en desuso a descargar del balance general de la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFIA) —empresa del Estado— correspondiente al ejercicio 1966, cuenta 360.07 Donaciones.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leopoldo Suárez. — Mario Romanelli.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

II

Apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 26 de abril de 1966.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento, en copia autenticada, el texto del decreto dictado en la fecha, por el que se señala las 11 horas del día 1º de mayo próximo para la solemne apertura de las sesiones del Honorable Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Juan S. Palmero.

—Al archivo.

III

Comunicaciones oficiales

La Universidad Nacional del Litoral solicita que por medio de una ley se disponga la edición de las

obras completas del doctor Alfredo L. Palacios. (A la Comisión de Interior y Justicia.)

—La Caja Nacional de Previsión para el Personal del Comercio y de Actividades Civiles eleva un informe redactado por el asesor técnico de la Comisión de Vivienda. (A la Comisión de Vivienda.)

—El Tribunal de Cuentas de la Nación remite antecedentes sobre observación de decretos. (A la Comisión Revisora de Cuentas.)

—La Cámara de Diputados de Santa Cruz comunica que ha sido electo senador nacional don Francisco García Leyenda.

Sr. Presidente. — Queda reservado sobre la mesa.

El señor gobernador de La Pampa eleva un mensaje sobre las tarifas de la energía proveniente del complejo El Chocón-Cerros Colorados. (A sus antecedentes.)

IV

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

1

Complejo El Chocón-Cerros Colorados

Buenos Aires, 26 de abril de 1966.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que la Honorable Cámara que presido ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre ejecución de las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El Poder Ejecutivo licitará, por intermedio de Agua y Energía Eléctrica empresa del Estado, y con sujeción al régimen financiero establecido en la presente ley, la ejecución de las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados sobre los ríos Limay y Neuquén en las provincias del Neuquén y Río Negro, y de las líneas de transmisión, con sus instalaciones complementarias, desde las centrales hidroeléctricas del complejo hasta el sistema eléctrico Gran Buenos Aires-Litoral.

A los fines de la financiación nacional e internacional y de la realización de la obra, declárase primera prioridad en el país en materia energética el complejo El Chocón-Cerros Colorados.

Art. 2º—Créase un fondo denominado «Complejo El Chocón-Cerros Colorados», con cuyos recursos Agua y Energía Eléctrica financiará la totalidad de las inversiones en moneda nacional necesaria para la ejecución de las referidas obras y reintegrará los adelantos a que se refiere el artículo 3º. El fondo se integrará con los importes provenientes de las siguientes fuentes:

1. Un recargo por kwh, establecido sobre el precio de venta de la electricidad, de un 2 % de la tarifa vigente en cada período y en cada zona, aplicada al consumidor final.

2. Un recargo del 3 % sobre el petróleo crudo que se elabore en el país, aplicado sobre los valores fijados por la Secretaría de Energía y Combustibles para los crudos nacionales y el valor CIF para los importados.
3. Asignaciones anuales del fondo nacional de la energía eléctrica no superiores al 20 % de lo recaudado para cada año.
4. Asignaciones anuales que fije el Poder Ejecutivo de los sobrantes brutos de explotación de los servicios a cargo de Agua y Energía Eléctrica, las cuales no excederán del 6 % de la tarifa media de Agua y Energía Eléctrica, excluida la venta en bloque a las provincias.
5. Los recursos provenientes de la emisión de obligaciones de que trata el artículo 5º.
6. Las sumas que el Poder Ejecutivo convendrá para ser aportadas por las provincias y municipios comprendidos en la región del Comahue.
7. Los préstamos de instituciones bancarias y de organizaciones de crédito públicas y privadas.
8. Los créditos adicionales de los proveedores de maquinarias y demás elementos de importación, para ser invertidos en obras civiles.
9. Los créditos de los proveedores locales y de aquellos a quienes el régimen bancario nacional haya otorgado préstamos para posibilitar la fabricación de elementos en el país.
10. Los préstamos de instituciones internacionales de crédito para ser aplicados a la financiación en moneda nacional.
11. El producto de la venta de inmuebles y de la constitución de derechos reales sobre los bienes de Agua y Energía Eléctrica a que se refiere el artículo 11 de esta ley.

El Poder Ejecutivo mantendrá la vigencia total o parcial de los recursos establecidos en los incisos 1º y 2º, en la medida en que lo exige la efectivización y suficiencia de los demás previstos en los restantes incisos de este artículo.

Los agentes de retención de las contribuciones fijadas en los incisos 1º y 2º de este artículo deberán ingresar mensualmente los fondos provenientes de las mismas, en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Agua y Energía Eléctrica podrá utilizar de servicios de los bancos oficiales de las provincias de Neuquén y Río Negro para operaciones que deban realizarse en los lugares de construcción de las obras.

Art. 3º—Agua y Energía Eléctrica someterá anualmente al Poder Ejecutivo, dentro de los plazos y en la forma que fijan los presupuestos de las empresas del Estado, el presupuesto de ingresos, gastos, inversiones y obligaciones del fondo; y dentro de los noventa días de finalizado cada ejercicio presentará al Poder Ejecutivo un estado financiero-patrimonial que refleje esos conceptos.

En los casos en que el fondo creado en el artículo anterior no cuente transitoriamente con recursos suficientes, el Tesoro Nacional adelantará a Agua y Energía Eléctrica las sumas necesarias para cubrir el monto de las erogaciones a efectuar durante la construcción de las obras del complejo, debiendo tales anticipos ser reintegrados por Agua y Energía Eléctrica a medida que lo permitan las recaudaciones del citado fondo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo participará, dentro del costo total de las obras, con el monto que corresponda, a las partes vinculadas con el riego y la atenuación de crecidas. A tal fin emitirá títulos sin interés, no negociables y reembolsables en un plazo de treinta años a partir de la puesta en funcionamiento de la totalidad de las obras del complejo. El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el presupuesto general de la administración nacional las sumas necesarias para la amortización de los títulos a que se refiere el presente artículo, con cuyos importes será constituido, conforme con la reglamentación que se dicte al efecto, un fondo especial con destino a la construcción en todo el país de obras de riego y de regulación de crecidas.

Art. 5º — Autorízase a Agua y Energía Eléctrica para cubrir los recursos previstos en el inciso 5º del artículo 2º, y en los términos del artículo 45 de la ley 15.336, con la emisión de obligaciones hasta la suma de diez mil millones de pesos (\$ 10.000.000.000) en las condiciones previstas en los artículos siguientes. La suma autorizada por el presente artículo podrá ser incrementada en la medida en que lo haga necesario el régimen de reajustes por mayores costos previstos en la ley 12.910 y disposiciones complementarias.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo, dentro de la suma total fijada en el artículo anterior, establecerá anualmente las condiciones de emisión y el monto total a invertir por Agua y Energía Eléctrica en cada año, de acuerdo con las necesidades de dicha empresa durante la ejecución de las obras y hasta el término de las mismas.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo incluirá en las condiciones de emisión de las obligaciones cláusulas que comprometan a la Nación en garantía de su pago y que aseguren a los suscriptores contra la posibilidad de desvalorización del signo monetario nacional, utilizando únicamente a tal fin índices de ajuste directamente vinculados con la economía del país.

Art. 8º — Los servicios de amortización e intereses de las obligaciones a que se refiere esta ley, así como los correspondientes a los créditos en divisas y a los demás previstos en el artículo 2º, serán incluidos en las tarifas de la energía producida por las centrales del complejo. Sin perjuicio de las garantías establecidas en el presente artículo y en el anterior, quedarán además afectados en garantía del pago de los servicios de las obligaciones citadas los beneficios que hubieren desde la fecha en que comience la producción de energía eléctrica.

Art. 9º — El Poder Ejecutivo fijará en cada emisión las normas de procedimiento y fiscalización dirigidas a la protección de los derechos e intereses de los obligacionistas.

Art. 10. — Agua y Energía Eléctrica podrá convenir con sus contratistas y proveedores, con sujeción a las normas legales en vigor, el pago de obras y suministros mediante entrega de las obligaciones cuya emisión se autoriza por esta ley.

Art. 11. — Autorízase a Agua y Energía Eléctrica, cuando necesidades financieras se lo requieran y con el destino especificado en el inciso 11 del artículo 2º, a constituir derechos reales sobre sus bienes inmuebles no afectados directa e inmediatamente al servicio público a su cargo; y a vender en licitación pública los inmuebles que se encuentren en las mismas condiciones y de los que pueda desprenderse sin perjuicio para los fines de la empresa, sea que se trate

de unidades individualizadas o que formen parte de mayores extensiones susceptibles de parcelación.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para obtener la financiación de los servicios y las partes de las obras que deban ser importados, cuidando de asegurar la participación en los suministros de la industria nacional, de acuerdo con lo establecido en esta ley y el decreto ley 5.340/63.

Art. 13. — Facúltase a Agua y Energía Eléctrica a incluir en los documentos de la licitación cláusulas que condicionen los afianzamientos previstos en los artículos 14 y 21 de la ley 13.064 a otras garantías especiales que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento de los contratos a celebrar, así como también todas las condiciones que se requieran para la mejor selección de la capacidad de los interesados para la ejecución de las obras.

Art. 14. — Quedan exentas del pago de los recargos a que se refiere la ley 16.690, de impuesto a las ventas y de todo otro gravamen que recaiga sobre las mercaderías de importación destinadas a incorporarse a las obras del complejo o que se utilicen para ejecutarlas. La determinación de las mercaderías sujetas a estas franquicias y la tramitación de las respectivas solicitudes de exención será reglamentada por conducto de las secretarías de Estado de Energía y Combustibles, de Industria y de Hacienda, con intervención de Agua y Energía Eléctrica y atendiendo a las previsiones del decreto ley 5.340/63.

Art. 15. — La Secretaría de Estado de Hacienda establecerá un régimen especial de fiscalización aduanera para la introducción de los elementos a que se refiere el artículo anterior, sobre la base de procedimientos de excepción que impidan toda demora que pueda gravitar sobre los plazos de ejecución de las obras.

Art. 16. — Queda autorizada Agua y Energía Eléctrica para girar al extranjero, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, los importes en divisas que correspondan a las amortizaciones e intereses de los créditos que se otorguen para la ejecución de las obras, así como también los correspondientes a honorarios por servicios y a beneficios por la realización de obras civiles eventualmente contratadas con empresas extranjeras. El Poder Ejecutivo arbitrará para cada vencimiento los medios que aseguren la conversión de la moneda nacional en la moneda en que hayan de efectuarse los pagos.

Art. 17. — Concédese a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales, vinculadas a las obras del complejo, para las mercaderías destinadas a las mismas o que sirvan para ejecutarlas, exención de impuesto a las ventas y de recargos de importación, así como también beneficios crediticios y reintegros impositivos hasta un máximo del 20 % del precio cotizado. La determinación y cantidad de las mercaderías sujetas a estas franquicias y la tramitación de las respectivas solicitudes de exención serán reglamentadas por conducto de las secretarías de Estado de Energía y Combustibles, de Industria y de Hacienda, con intervención de Agua y Energía Eléctrica y atendiendo a las previsiones del decreto ley 5.340/63.

Art. 18. — Agua y Energía Eléctrica librará al servicio las instalaciones del complejo a medida que ellas puedan suministrar energía, sujetando su explotación al siguiente régimen:

- a) Se asegurará permanente prioridad en el abastecimiento de potencia y energía eléctrica proveniente de las centrales del complejo a la región del Comahue, debiéndose actualizar anualmente las previsiones del crecimiento de la demanda del servicio público de electricidad en la mencionada región;
- b) 1. A las fines de la presente, denominase región del Comahue al territorio integrado por las jurisdicciones provinciales completas de Neuquén y Río Negro; por los departamentos de Puelén, Cura-Co, Lihuel Calel y Caleu Caleu de la provincia de La Pampa y por el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
2. Al solo efecto de la prioridad en el abastecimiento de potencia y energía eléctrica establecida en el inciso a) incorpóranse a la región del Comahue los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.
- c) Las demandas de potencia y energía de sistemas eléctricos de servicios públicos ubicados fuera de la región del Comahue serán satisfechas con la potencia y energía sobrantes de esta región.
- La liberación de dichos sobrantes y su reintegro a la región del Comahue será obligatoria, debiendo mediar una notificación de Agua y Energía Eléctrica a los distribuidores o usuarios, hecha con tres años de anticipación, a fin de que éstos adopten las medidas necesarias para substituir la potencia y energía liberadas para su reintegro a la región del Comahue;
- d) Las demandas de energía de carácter extraordinario en la región del Comahue, que supongan afectación de la producción de las centrales del complejo, en exceso relevante con respecto al crecimiento normal de la demanda del servicio público de electricidad en la zona, serán satisfechas, a juicio de la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, en tanto ello no altere las previsiones vinculadas al desarrollo armónico de la región en sus aspectos económicos, técnicos y sociales;
- e) La tarifa de la energía a proveer en la región del Comahue será fijada anualmente y estará integrada en cuanto fuere de aplicación, por todos los factores de costo a que se hace referencia en el artículo 39 de la ley 15.336 y de los señalados en el artículo 8º de esta ley, correspondientes a la totalidad de las obras e instalaciones del complejo y de su sistema de transmisión, incrementada, cuando procediere, por el costo de transmisión, distribución y comercialización hasta los centros de consumo de dicha región. Hasta tanto no se cumpla el extremo previsto en el inciso f) siguiente, en la mencionada tarifa no se incluirá el ciento interés del capital;
- f) La tarifa a que se refiere el inciso anterior será mantenida durante un plazo mínimo de veinte años y podrá ser modificada, con posterioridad a dicho plazo, cuando se consideren

cumplidos los fines de promoción y desarrollo que la misma supone para la región del Comahue;

- g) Fuera de la región del Comahue, para la prestación del servicio público de electricidad con energía proveniente de las centrales del complejo, se aplicarán las siguientes normas:

1. A la salida de las estaciones transformadoras terminales de Florencio Varela y Riachuelo la tarifa de la energía suministrada por las centrales del complejo será igual al costo, en esos puntos, de la energía térmica del sistema comprador, teniéndose en cuenta la ubicación de dicha energía dentro de su diagrama de carga.

2. A la salida de las estaciones transformadoras que se instalen en Puelches y Henderson la tarifa estará comprendida entre la del apartado anterior, como máximo, y la fijada para la región del Comahue más el costo de rebaja en esos puntos, como mínimo.

Los partidos de la provincia de Buenos Aires incorporados en el apartado 2 del inciso b) de este artículo gozarán de esta tarifa rebajada en forma inversamente proporcional a la distancia existente entre el centro eléctrico de gravedad de las centrales del complejo y el punto de entrega de la energía eléctrica;

- h) El beneficio anual resultante de la explotación de las obras del complejo será invertido por Agua y Energía Eléctrica en la siguiente forma: 33,33 % para la ejecución de obras de aprovechamiento hidroeléctrico y de riego en la región del Comahue, y 33,33 % para los mismos fines en las zonas áridas y semiáridas del resto del país. El restante 33,34 % será invertido por las provincias limítrofes de los ríos Limay y Neuquén en obras de promoción económica y hasta tanto se complete el desarrollo integral de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 15.336;

i) A los fines del inciso anterior, Agua y Energía Eléctrica contabilizará el mencionado beneficio anual en una cuenta especial, de manera que pueda ser individualizada en todo momento;

j) Quedan incluidos a los efectos del apartado 2 del inciso b) de este artículo los departamentos de Atreucó, Guatraché, Hucal y Utracán de la provincia de La Pampa.

Art. 19. — Quedan sujetos a expropiación por causa de utilidad pública los bienes cuyo dominio resulte necesario a Agua y Energía Eléctrica para el cumplimiento de esta ley y cuya ocupación se requiriera para la construcción de presas, formación de embalses, construcción de canales de alimentación y restitución, instalación de centrales generadoras y estaciones de transformación, ubicación de líneas de transmisión, campamentos, accesos, caminos u otras obras indispensables para el cumplimiento de los fines de esta ley. Dichos bienes, por igual causa, quedan también sujetos a servidumbre y a limitaciones o restricciones al dominio permanente o temporarias. El Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, determinará en cada caso el bien o los bienes que quedarán comprendidos en la declaración de este artículo. Esta determinación es-

pecífica caducará a los dos años desde la fecha de publicación del respectivo decreto, si durante ese término no se promovieran los respectivos juicios por Agua y Energía Eléctrica, no rigiendo en este caso lo dispuesto por el artículo 29 de la ley 13.264, cuyos demás preceptos serán de aplicación para todos los casos previstos.

Art. 20. — Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles que se encuentren ubicados en la zona de influencia de las obras y que serán regados por las aguas embalsadas, que a la fecha de la sanción de esta ley no se encuentren bajo regadío efectivo, con régimen de concesión permanente o eventual, con aguas provenientes de obras públicas o privadas. A los fines de este artículo, el Poder Ejecutivo, inmediatamente después de la iniciación de las obras del complejo y antes de la iniciación de las obras de colonización, convendrá con las provincias comprendidas en la región del Comahue, ad referendum del Congreso de la Nación, las modalidades a que se ajustará la colonización de las tierras comprendidas en la declaración precedente, y la financiación de los planes que se acordaren sobre la base del estricto cumplimiento de los fines de esta ley y con sujeción al principio de impedir toda especulación que altere el propósito esencial de promover efectivamente el desarrollo armónico en toda la región.

Art. 21. — El Poder Ejecutivo convendrá con las provincias comprendidas en la región del Comahue las modalidades de cooperación recíproca dirigidas al mejor aprovechamiento de las aguas embalsadas, sobre la base de una equitativa distribución de los caudales y de una efectiva coordinación de planes que aseguren el más eficiente uso y conservación de los recursos hidráulicos comprometidos y contemplen la promoción y conservación de la riqueza íctica y el desarrollo futuro de toda la región en el orden económico, social e industrial; así como también el régimen a establecer sobre la aplicación y distribución de contribuciones de mejoras y fijación de cánones de riego; todo ello con sujeción al principio de permitir la recuperación en el término técnicamente justo del capital invertido, a fin de dar continuidad a la realización de obras de aprovechamiento similar.

A los fines de la colonización referida en el artículo anterior, y del desarrollo económico, social e industrial y demás previsiones de este artículo, se creará, ad referendum del Congreso Nacional, un ente integrado por la Nación y las provincias contratantes.

Art. 22. — Agua y Energía Eléctrica practicará los estudios y preparará los proyectos de las obras de riego para el aprovechamiento de las aguas de los embalses de El Chocón y Cerros Colorados, procediendo a la mayor brevedad a la terminación de los estudios y preparación de los proyectos vinculados con el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos de la llamada región del Comahue.

Art. 23. — A los fines del artículo 36 de la ley 15.336 declárase que formarán parte de la Red Nacional de Interconexión las centrales hidroeléctricas de El Chocón y de Planicie Banderita; las estaciones transformadoras de El Chocón y de Cerros Colorados; las estaciones intermedias de Puelches y Henderson; las estaciones terminales de Florencio Varela y Riachuelo; las líneas de transmisión para el transporte de la energía producida por las centrales mencionadas al sistema Gran Buenos Aires-Litoral; y todas las obras, líneas de transmisión, redes de distribución e instalaciones complementarias que integran el complejo El Chocón-Cerros Colorados hasta los puntos de en-

trega de la energía a otros sistemas. La operación y mantenimiento así como la atención del despacho de carga de las centrales hidroeléctricas mencionadas, quedará a cargo de Agua y Energía Eléctrica.

Art. 24. — La primera prioridad para la financiación nacional e internacional, reconocida en el artículo 1º de esta ley para las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados, se hace extensiva a las obras para el aprovechamiento energético de los saltos del río Uruguay en la zona de Salto Grande y otras similares en el país.

Art. 25. — Las disposiciones de esta ley se aplicarán aun cuando haya otras que se le opongan.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ARTURO MOR ROIG.
Eduardo T. Oliver.

—A las comisiones de Energía y Combustibles, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, y de Obras Públicas.

2

Elección de autoridades

La Honorable Cámara de Diputados comunica que han sido designados presidente y vicepresidente 1º y 2º los señores diputados Mor Roig, Tecera del Franco y Uranga, respectivamente. (Al archivo.)

V

Dictamen de comisión

La Comisión de Trabajo y Previsión Social produce dictamen en el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados a algunas modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley sobre contratos de trabajo (ley 11.729). (Al orden del día.)

VI

Peticiones particulares

Don Eugenio Kewel solicita que se investigue un proceso de excusación de miembros de la Cámara 3ª en lo Penal y jueces del mismo fuero, de la ciudad de La Plata, para entender en las denuncias formuladas contra los doctores Acdeel Salas y Juan Cianis. (A la Comisión de Interior y Justicia.)

—El Frente Democrático Revolucionario, don Juan Carlos Fernández Rivas, la Unión Industrial Argentina y otras entidades empresarias y sindicales elevan notas relacionadas con el proyecto de ley en revisión sobre contratos de trabajo (ley 11.729). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

—La Cámara de Comercio, hoteles e industrias de Puerto Iguazú, Misiones, manifiestan su adhesión al proyecto de comunicación del señor senador Olmedo sobre restablecimiento del servicio de buques de pasajeros en las líneas Buenos Aires-Corrientes y Corrientes-Puerto Iguazú. (A la Comisión de Comunicaciones y Transportes.)

VII

Sanciones impuestas al personal por la Comisión Administradora de Emisoras Comerciales y LS 82 TV Canal 7. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Salmén, Astudillo y Bernardo

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva informar acerca de los siguientes puntos:

1. Si tiene conocimiento que la Comisión Administradora de Emisoras Comerciales y LS 82 TV Canal 7 amenaza, suspende y cesantea con diversos pretextos y argumentos inexactos al personal, y particularmente al plantel de prensa afectado al noticiero de TV Canal 7.
2. Si las medidas coercitivas de diverso tipo que se utilizan contra el personal del noticiero, especialmente, tienen por finalidad realizar, mediante drásticas exclusiones, una selección partidista del plantel del mismo.
3. Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social ante estas arbitrariedades y reiteradas violaciones de las normas del derecho laboral y de elementales normas de ética, que han motivado denuncias ante ese ministerio.

Félix E. Astudillo. — Miguel Salmén. — Miguel Angel Bernardo.

—A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

VIII

Modificación de los artículos 201 y 206 de la ley de quiebras. — Proyecto de ley del señor senador Olmedo

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 201 y 206 de la ley 11.719 correspondientes a los artículos 1.579 y 1.584 del Código de Comercio, de la siguiente forma:

- a) Artículo 1.579 (201 de la ley 11.719). — Cuando el activo no exceda de los cien mil pesos (\$ 100.000) el procedimiento establecido para el concordato preventivo será un preliminar obligatorio de la quiebra de los comerciantes, aunque éstos no estén matriculados y de los no comerciantes inscritos en el Registro Público de Comercio, a que se refiere el artículo 1º, ya se inicie el juicio a pedido del deudor o de algunos de sus acreedores;
- b) Artículo 1.584 (206 de la ley 11.719). — En cualquier estado del juicio en que se compruebe que el activo excede los cien mil pesos (\$ 100.000) se aplicarán las disposiciones comunes al juicio de quiebra. Regirán también esas disposiciones y las del concordato preventivo para todo lo que no esté modificado o previsto en este artículo.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rolando Olmedo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La actual ley de quiebras 11.719 prevé en el capítulo XXIII el régimen de las pequeñas quiebras, estableciendo un procedimiento especial y económico. A ese régimen podrán acogerse los comerciantes matriculados, los comerciantes no matriculados y los no comerciantes que estén inscritos en el Registro Público de Comercio.

Para optar a ese beneficio es indispensable que el pasivo no exceda de la suma de cinco mil pesos.

En la época que vivimos esa institución ha desaparecido por el pequeño margen que se otorga. Por ello es indispensable su reactualización fijando una suma conveniente. En la reforma que se propone se estima que la suma de cien mil pesos sería un índice de la misma.

Por otra parte, al reactualizarse el monto es indispensable completar la reforma con las modernas concepciones en la materia.

En el Primer Congreso Nacional de Derecho Comercial se resolvió, entre numerosas ponencias, pedir la reforma del elemento determinante de las pequeñas quiebras de la siguiente manera:

«Debe establecerse —en las pequeñas quiebras— como causa determinante del procedimiento la limitación del activo y no del pasivo como en la ley actual.»

El fundamento lógico y práctico de la petición se basa en que el pasivo es más fácil de hacerlo desaparecer para beneficiarse con este instituto. Por esa razón, tomando como norma la limitación del activo, se dará más seguridades al procedimiento y a las nobles finalidades de la creación del mismo.

El profesor Francisco García Martínez, en su obra *El concordato y la quiebra*, tomo III, página 161, nos afirma al respecto:

«El sistema de nuestra ley, que es a este respecto igual al de la ley italiana, pues ésta, como sabemos, toma también como base el pasivo, ha sido justamente censurado, porque permite al deudor, para eludir la quiebra ordinaria, reducir el monto de sus deudas al límite legal, es decir a cinco mil pesos moneda nacional.»

Presento, pues, esta inquietud al Honorable Senado de la Nación a efectos de ir acomodando las instituciones a la evolución económica que vivimos y su debido mejoramiento de acuerdo con lo peticionado por los congresos de sectores especializados en la materia.

Rolando Olmedo.

—A la Comisión de Legislación General.

IX

Otorgamiento de créditos a profesionales universitarios.

— Proyecto de comunicación del señor senador Rispoli Román

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo adoptara las medidas que el caso aconseja por intermedio de quien corresponda, para que el Banco de la Nación Argentina reglamente, con la premura posible, el otorgamiento de créditos a profesionales universitarios, de hasta quinientos mil pesos (\$ 500.000) a largo plazo, y con módico interés.

Enrique G. Rispoli Román.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El éxodo de profesionales de América latina y en especial de la República Argentina es un hecho que preocupa a la Organización de Estados Americanos en razón de que «no puede América latina permitirse el lujo de perder la cantidad de científicos y técnicos que vienen a residir en Estados Unidos».

Por cierto que esta cuestión debiera preocuparnos a los argentinos en mayor medida, atento a que el impacto de esta emigración tecnológica la soportamos nosotros, siendo bien sabido que la falta de personal técnico es una de las causas que retardan el favorable desarrollo económico de nuestro país.

En un informe redactado por un sociólogo para el Fondo Especial de las Naciones Unidas que publica el diario «La Nación» en la primera página de su edición del 25-4-66, asevera que de la Argentina fueron a los Estados Unidos 13.800 emigrantes de alta capacidad técnica durante el período 1950-1964, expresando dicho informe que se trata principalmente de médicos, ingenieros y otros profesionales quienes abandonan este país en vías de desarrollo para buscar empleo en otros países.

En un informe del BID que publica el diario «Crónica» del 20-3-66 en su página 5, señala que entre mediados de 1951 y principios de 1963, según datos oficiales, emigraron a Estados Unidos 11.200 argentinos; de esta cantidad el 47 % son profesionales y técnicos, el 14,9 % administradores de elevado nivel y el 38,1 %, obreros especializados.

Es evidente que no puede contemplarse impasible tal éxodo de técnicos que tanto necesita el país y cuya formación tan caro cuesta, sin poder aprovechar la capacitación que nuestras universidades les han dado.

Resulta necesario puntualizar que es la falta de una perspectiva de futuro lo que impulsa esta emigración, no siendo una de las menores causas la circunstancia que —sobre todo el novel profesional— se encuentra en muy desiguales condiciones de lucha cuando carece de recursos para crearse las mínimas condiciones de decoro.

Debemos pensar en lo que significa para un médico o un odontólogo la adquisición de un consultorio, cuando carece de medios y el Estado no le acuerda los créditos necesarios, al igual que los técnicos de las diversas especialidades que se ven excluidos por completo de las posibilidades de obtención de créditos adecuados, todo lo cual los coloca a la zaga de agricultores, comerciantes e industriales, como si estos fueran los únicos que contribuyen al progreso, creando todo ello el desaliento y provocando finalmente su radicación fuera del país con el perjuicio consiguiente que es necesario evitar.

En abono de las situaciones que planteo, no debo dejar de citar el caso del doctor Domingo Liotta, médico entrerriano, recibido en una facultad argentina y que debió emigrar de su país a los Estados Unidos ante la falta de apoyo que aquí encontró para poder perfeccionar el corazón artificial que posibilitó la fantástica operación practicada por el cirujano DeBakey que apasiona en estos momentos a la opinión mundial («La Razón», 25-4-66).

Tales son, entre otras, las razones que fundamentan esta minuta de comunicación, para la que solicito favorable resolución.

Enrique G. Rispoli Román.

—A la Comisión de Economía.

X

Transferencia de subsidios para auxiliar a los damnificados por las inundaciones. — Proyecto de comunicación del señor senador Olmedo

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por medio del ministerio que corresponda proceda a transferir —a la brevedad— al gobierno de la provincia de Misiones el monto de los subsidios otorgados por las leyes 16.720 y 16.764 para ayudar a los damnificados por las inundaciones provocadas por el río Paraná en el barrio del Chaquito de la ciudad de Posadas y zonas perjudicadas por las inundaciones del río Uruguay, durante el año 1965.

Rolando Olmedo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Oportunamente el Congreso de la Nación por medio de las leyes 16.720 y 16.764, sancionadas con fecha 2 de septiembre y 28 de octubre de 1965, respectivamente, otorgó los subsidios de diez millones de pesos (\$ 10.000.000) para los inundados del barrio del Chaquito, en la ciudad de Posadas, y cincuenta millones (\$ 50.000.000) para los afectados por las inundaciones del río Uruguay en la provincia de Misiones.

A pesar del tiempo transcurrido la ayuda del Estado federal no ha llegado aún, pues por causas diversas esos fondos no fueron transferidos al gobierno de la provincia para que esos sectores tan castigados reciban la ayuda que tanto necesitan.

La demora en que se incurre lleva la desesperanza a humildes hogares y estimo que no debe demorarse, porque en estos casos debemos expresar nuestra solidaridad en forma inmediata. Su demora es un retaceo inadmisible y niega la noble finalidad que inspiró al Congreso de la Nación.

Rolando Olmedo.

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.

XI

Construcción del aeropuerto de Cataratas del Iguazú. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Olmedo y Rodríguez

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:

1. — Requiera de la Secretaría de Aeronáutica se incluya en el plan general de infraestructura la construcción del aeropuerto de Cataratas del Iguazú y de la ciudad de Posadas (Misiones) como primera prioridad en la ejecución de las obras a realizar.

2. — Destine los fondos necesarios para la construcción de esos aeropuertos con las características que son indispensables en los sectores afectados por el turismo internacional.

Rolando Olmedo. — Eugenio L. Rodríguez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Hace poco tiempo hemos presentado a este Senado de la Nación, en nombre de la provincia de Misiones, un proyecto de desarrollo turístico del sector de las Cataratas del Iguazú y en su punto tercero reclamábamos del superior gobierno de la Nación: «Haga saber a la Secretaría Nacional de Aeronáutica que es indispensable —en el menor tiempo posible— la construcción de un aeropuerto, en el Parque Nacional del Iguazú, apto para el aterrizaje de modernas aeronaves —tales como los jets, los Caravelle, etcétera—, a efecto de facilitar el desplazamiento de los turistas de cualquier parte del mundo, en forma rápida y confortable.»

Estimábamos que nuestro reclamo sería oído por quienes tienen en sus manos la solución de los problemas que hacen al desarrollo turístico de las Cataratas del Iguazú —maravilla del mundo— tan apreciadas en el concierto universal y tan castigadas por el más olímpico olvido en el orden nacional.

La Secretaría de Aeronáutica ha aprobado —recientemente— su plan general de infraestructura en el cual se encaran las prioridades establecidas para la realización de las obras y trabajos de índole distinta que se efectuarán en los aeródromos nacionales.

En ese plan general se prevé un total de 7.372 millones de pesos, ubicándose como de primera prioridad al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, para quien se destina la suma de 216 millones; al aeropuerto de Ezeiza, 1.236 millones; a Bahía Blanca, 284 millones; a Comodoro Rivadavia, 166 millones; a Córdoba, 311 millones; Mar del Plata, 93 millones; Mendoza, 118 millones; Paraná, 131 millones; Resistencia (Chaco), 91 millones; Río Gallegos, 371 millones; Rosario, 36 millones; Salta, 90 millones; Santiago del Estero, 101 millones; Tucumán, 195 millones.

Como segunda prioridad: Catamarca, Formosa, Jujuy, Monte Caseros, Neuquén, Orán, Paso de los Libres, Sauce Viejo, Santa Rosa, Trelew y Posadas (Misiones). Y para finalizar la lista incluye al aeropuerto de las Cataratas del Iguazú como tercera prioridad.

Es decir, que no se tiene la menor intención de construir el gran aeropuerto que esa zona reclama ni menos efectuar las mejoras indispensables que lo harían utilizable en todo tiempo.

La ubicación que se ha dado, en las prioridades, al aeropuerto de las Cataratas del Iguazú nos lleva a la conclusión de que no se tiene cabal noción de la tremenda importancia que representa para el desarrollo nacional la explotación turística del Parque de Iguazú.

Nuestra provincia ha venido reclamando con insistencia la construcción de las obras indispensables que la saque de la incomunicación en que se debate. Es público y notorio que Misiones tiene solamente 78 kilómetros de ferrocarril en su jurisdicción y ese medio de locomoción la comunica con Buenos Aires con un servicio tan malo que no sería deseable ni siquiera para el transporte de animales; ferrocarril que pasa por el extremo Sur de la provincia, distante más de 400 kilómetros de las cataratas, que están en el extremo Norte. El transporte por vía fluvial era servido por los barcos de la Flota Argentina de Navegación Fluvial con escala en Paraná, Corrientes, Posadas y Puerto Iguazú, pero fueron suspendidos

por razones de «economía» en el año 1961 y aún no fue restablecido ese servicio tan indispensable al Nordeste argentino.

Por vía terrestre, Misiones se comunica por las rutas 12 y 14 con todo el país. La primera no tiene ni siquiera la esperanza de hablar de su pavimentación; la segunda hace más de quince años que se planifica y construye quedando todavía unos 250 kilómetros de caminos de tierra para unir Posadas-Corrientes, que en épocas de lluvias —todo el año— es más que intransitable y quien se atreve a cruzar esos lodazales debe tener alma de suicida. Para el interior de la provincia sólo corren unos 70 kilómetros de pavimento realizado por Vialidad Nacional en más de diez años de trabajos y su último tramo San Ignacio-Santo Pipó (18 kilómetros) hace tres años que se planifica, habiendo sido recientemente adjudicada la obra con cargo de terminarla dentro del plazo de 36 meses, plazo excesivo dado el corto trayecto.

Es decir, que siguiendo ese ritmo, de construir unos veinte kilómetros de caminos pavimentados cada seis años, necesitaremos noventa años para realizar los 300 kilómetros que faltan para completar la vía Posadas-Puerto Iguazú.

Durante los últimas inundaciones provocadas por las intensas lluvias que azotaron la mesopotamia argentina, todo el interior de la provincia se vio incomunicado por sus rutas, quedaron intransitables, y sus puentes fueron cubiertos por las aguas de los arroyos desbordados de sus cauces. Es así como las Cataratas del Iguazú quedaron aisladas por vía fluvial y terrestre.

El aeropuerto de las cataratas quedó inoperable por malas condiciones de la pista y el aislamiento de Misiones fue entonces total.

Todos estos hechos son de conocimiento público como el subsecretario de Obras Públicas lo comprobó en reciente fecha, y debieron ser tenidos muy en cuenta para dar al aeropuerto de Cataratas del Iguazú y de Posadas la importancia que realmente tiene. No solamente los señores senadores de la provincia de Misiones han reclamado en forma insistente sobre el problema sino también la prensa de nuestra provincia y de toda la Nación. A nadie escapan los reclamos efectuados también por el señor gobernador de Misiones y las promesas de las autoridades nacionales de dar debida atención.

Ahora nos encontramos frente a la triste realidad de que de nada ha servido nuestra petición y se nos condena al olvido, se nos castiga a una permanente incomunicación y se nos posterga indebidamente a pesar del tremendo esfuerzo que realiza silenciosamente el pueblo de la provincia de Misiones, trabajando de sol a sol, para derramar su producción al servicio del hombre necesitado de Argentina.

Informe del director general de Infraestructura de Aeronáutica. — En el mes de julio de 1965 el senador Rolando Olmedo solicitó a la Dirección General de Aeronáutica informe sobre la construcción del gran aeropuerto de Cataratas del Iguazú y el brigadier Abelardo Serafin Sangiacomo remitió un memorándum sobre los estudios realizados, que dice así:

«Construcción del nuevo aeródromo en Iguazú, Misiones. — 1. Después de comprobar la imposibilidad técnica de la prolongación de la actual pista en uso, esta dirección general efectuó los estudios necesarios a efectos de ubicar un nuevo emplazamiento.

»2. El estudio fue realizado sobre estereogramas (pares estereoscópicos) a escala 1:10.000 como base cartográfica sobre la cual se asentó el estudio estereoscópico.

»3. Del estudio de las áreas, no muy lejanas a Iguazú, resultó que existe sólo una faja de terreno próxima a la costa del río Iguazú que permite la ejecución del nuevo aeropuerto.

»Se adjunta como anexo 1 un croquis en el cual se ha dibujado la dirección de la nueva pista propuesta.

»4. En el plan de infraestructura nacional se encuentra prevista la construcción de una pista, plataforma, calle de rodaje, balizamiento y sistema visual de planeo por aproximación a la provisión del equipamiento de comunicaciones y meteorología adecuado.

»5. El plan de infraestructura nacional forma parte del plan nacional de desarrollo, no pudiéndose, aún, precisar las posibilidades de su financiación.»

La construcción del nuevo aeropuerto se estimó en la suma de 240 millones para la pista, plataforma y carretero y la de 100 millones para la aeroestación, construcciones complementarias y equipamiento. Todos los costos fueron estimativos con las correspondientes variaciones cuando se realice el proyecto definitivo.

Informe del director de turismo de la provincia de Misiones.—Con fecha 28 de enero de 1966, el señor director de Turismo de la provincia de Misiones, señor Julio César Sánchez Ratti cursó un informe de reclamos de mejoras para el Parque Nacional del Iguazú al señor interventor de la Dirección Nacional de Turismo don Mauricio Fischer, en uno de cuyos párrafos dice: «Aeropuerto.—El señor gobernador don Mario Losada a su regreso de la Capital Federal informó de las gestiones realizadas ante los directivos de Aerolíneas para que no suspendieran los vuelos a Cataratas (por malas condiciones del aeropuerto), que afortunadamente resultaron exitosas. El señor gobernador también informó que en la reunión celebrada en el despacho del señor secretario de Obras Públicas e interino de Transporte doctor Miguel Ángel Martínez, se había considerado este problema cuya solución sería encarada con el aporte de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Aeronáutica y el de esta provincia.»

Nota de la Cámara de Comercio, Hoteles e Industrias de Puerto Iguazú.—Con fecha 15 de abril de 1966, la Cámara de Comercio, Hoteles e Industrias de Puerto Iguazú (Misiones) que preside el señor Juan Osteneros, ha remitido una extensa nota al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Carlos H. Perette apoyando la inquietud de restablecer el servicio fluvial en el tramo Corrientes-Puerto Iguazú. Algunos de sus párrafos los transcribimos pues constituyen el fiel reflejo del sentir del pueblo misionero:

«Las fuerzas vivas de Iguazú —dice— representan por esta Cámara, no podían quedar ajenas a esta inquietud que permanece latente desde hace cinco años. Misiones sufre un déficit tremendo en materia de comunicaciones; sin ferrocarriles y sin caminos, está dando al país un ejemplo de sacrificio y laboriosidad avanzando en su desarrollo a pesar de estos inconvenientes.

»Quizás nadie sufra tanto las consecuencias desastrosas de la situación que mencionamos, como los que tenemos que luchar para mantener en actividad

el comercio, la hotelería y la industria en esta región del Parque Nacional del Iguazú.

»Para muchos resulta increíble que una amplia zona de la República, comprendida desde la ciudad de Posadas hasta esta localidad, en una enorme área con miles de habitantes, pueda llegar a quedar totalmente aislada del resto del país, incluso en materia de comunicaciones telefónicas, muchas veces por año.

»Pero cuando los incrédulos, por propia experiencia, deben reconocer la realidad y pueden palpar sobre el terreno los daños incalculables que estas situaciones causan a la economía de esta provincia, sólo atinan a pensar que es inconcebible que esto suceda en pleno siglo veinte y en un país civilizado, y muchos se van, para no volver jamás, lamentando las penurias pasadas por haber querido conocer «una de las maravillas del universo». (Corroborando lo antedicho podemos citar que en el año 1965 las crecidas de los arroyos que cruzan la ruta 12 impidieron el paso de toda clase de vehículos en más de cuarenta oportunidades.)

»A esto debemos agregar que los malos caminos y la inseguridad en los servicios aéreos, por falta de un aeropuerto acorde con la importancia de la zona, hace que una enorme corriente turística de países de moneda fuerte que viaja por la ruta: Río de Janeiro-Brasilia-San Pablo-Cataratas-Buenos Aires, se desvíe vía Asunción dejando de lado a la provincia de Misiones cuyas bellezas naturales son dignas de verse, pero cuyos caminos resultan intransitables.

»Mientras Paraguay, con mayor visión, ha procedido al asfaltado de la ruta desde el límite con Brasil hasta Asunción, para captar todo ese tráfico de indudable interés comercial y Brasil, con idéntico criterio, se encuentra abocado en la construcción de un moderno aeropuerto internacional, para transportar a esos turistas en jet, nosotros, propietarios de las cataratas, estamos mirando pasar por nuestros límites ese movimiento turístico sin concretar las obras mínimas indispensables para poder canalizar todo ese tráfico por nuestra provincia.

»Podemos asegurar que Misiones y el país, están perdiendo incontables sumas al año, por la falta de concreción de proyectos como el que nos ocupa. Tenemos esperanzas de que en este año 1966 han de comenzar a realizar esas obras básicas, que nos den el impulso necesario para poder hacer de la región de las maravillosas cataratas del Iguazú el centro turístico que Misiones necesita y el país merece como un aporte más a su pleno desarrollo.»

Perjuicios que se causan al país y al prestigio turístico.—La permanente postergación de las obras indispensables para dar a las cataratas del Iguazú las características de una zona de turismo internacional ocasiona perjuicios al prestigio del país y la pérdida de una fabulosa fuente de recaudación de divisas que tanto necesitamos para hacer frente a la angustiosa situación en que se debaten las finanzas de la República.

La construcción del gran aeropuerto de las cataratas del Iguazú es una obra de urgente necesidad y debe situársela como primera prioridad. Un ejemplo elocuente del perjuicio que se ocasiona al turismo nacional y al prestigio del país lo tenemos en el relato que hace el señor director de turismo de la provincia de Misiones en la comunicación al señor interventor de la Dirección Nacional de Turismo: «El día 19 de diciembre próximo pasado —dice—, arribaron a Misiones en el avión de Aerolíneas Argentinas 24 pasajeros

al Iguazú, entre ellos 17 turistas mejicanos. Por mal tiempo el avión no viajó a las cataratas y tuvieron que pernoctar en Posadas. Salieron al día siguiente —en colectivo— a las 4 de la mañana y llegaron a Puerto Iguazú recién a las 18 horas, después de un penoso viaje de 14 horas, lleno de dificultades para recorrer los 375 kilómetros hasta Iguazú. El mismo día llegó otro grupo de 38 turistas procedentes de los Estados Unidos de América y de México. Salieron de Posadas a las 19 horas y recién llegaron a destino a las 23 del día siguiente. Tardaron nada menos que 28 horas en un viaje inenarrable. En el hotel de Cataratas del Iguazú tuvieron que alumbrarse a vela porque el motor eléctrico no funcionaba. Al día siguiente —sin recorrer los saltos del lado argentino— se ausentaron a la vecina localidad de Foz de Iguazú (Brasil), y desde allí regresaron a Río de Janeiro, visitando nuestras maravillas desde el lado brasileño, porque no querían seguir sometidos a las torturas que le ofrece el turismo nacional.

»Supóngase, señor interventor, cuál será la propaganda que harán estos turistas de nuestra República Argentina, necesitamos el turismo dólar. hacemos propaganda para atraerlo, pero estoy seguro de que con estos ejemplos no vamos a conquistar a nadie.»

Como estos casos tenemos cientos y el propio señor secretario de Obras Públicas e interino de Transporte pudo presenciar uno de ellos en Puerto Iguazú cuando por estar inoperable la pista no pudieron seguir viaje a Buenos Aires más de 40 turistas de los Estados Unidos, Francia y México.

Aeropuerto de Puerto Iguazú, una necesidad nacional. — En nombre de la provincia de Misiones venimos a reclamar la inmediata construcción del gran aeropuerto de Puerto Iguazú porque ello constituye una necesidad nacional. No podemos admitir que se ubique al aeropuerto de Posadas como segunda prioridad y al Iguazú como tercera. Eso es desconocer la real necesidad del turismo nacional.

El país se halla abocado al cumplimiento de un magnífico plan de desarrollo y ese plan, lo afirmamos, jamás podrá ser cumplido si no se proyecta una audaz planificación turística que habrá de aportar los dólares para la ejecución del mismo. En ese plan estimamos deben colocarse como prioridad suprema la facilidad de las comunicaciones y la seguridad de urgentes desplazamientos, amén del complemento de confort y comodidad que deben reunir los sectores afectados al turismo internacional.

La inversión que pueda destinarse al aeropuerto de Iguazú será redituable al infinito. En la lista de las primeras prioridades existen numerosas construcciones que tienen menor importancia que la que reclamamos. No es posible que destinen miles de millones a sectores improductivos y se abandone a las zonas que tienen interés internacional y pueden aportar enormes sumas de divisas al país.

La Argentina es uno de los países más atrasados en materia turística, a pesar de todo lo que se ha hecho. Estamos en mejores condiciones que cualquier país para dar al turista lo que el turista busca en los rincones del mundo. Desde el clima variado a la inmensa vista panorámica que va desde el Iguazú al estrecho de Magallanes y del Atlántico al macizo de los Andes. Otros países con menos de lo nuestro han solucionado su economía dando al turismo una explotación racional. Las estadísticas que anualmente se publican son más que elocuentes. En el año 1962 Italia recaudó por tal concepto la suma de 847 millones de dólares; México, 821 millones de dólares; Ca-

nadá, 524 millones de dólares (cataratas del Niágara); España, 512 millones de dólares; Chile, 38 millones de dólares; Uruguay, 33 millones de dólares, y nuestra Argentina, solamente 8 millones de dólares.

Cómo vamos a recaudar millones de dólares si la mayoría de los sectores turísticos del país adolecen de las mismas incomodidades del Iguazú, que es objetivo del turismo internacional y se lo relega al más absoluto abandono.

En 1964, España fue visitada por 11 millones de turistas que dejaron en las arcas del Estado español más de 1.000 millones de dólares, en cambio, a la Argentina sólo vinieron unos 25.000 que nos aportaron 46 millones de dólares. Si seguimos los informes estadísticos podremos apreciar las sumas fabulosas que ingresaron por tal concepto en las arcas de los estados de España, Italia y México durante el año 1965. Nosotros seguimos durmiendo todavía en los pastizales de los campos esperando que las vacas engorden...

Nuestra inquietud, en este proyecto, es de que las autoridades nacionales, las del Ministerio de Transportes, las de Aeronáutica, las de la Dirección Nacional de Turismo comprendan que lo que venimos a reclamar no es una antojadiza pretensión del pueblo misionero, sino una necesidad nacional. Misiones —hemos dicho en una oportunidad— reclama las herramientas para dar con su trabajo las divisas que necesita el país.

Por eso venimos a pedir que los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú se incluyan en la primera prioridad del tránsito aéreo y se destinen los fondos necesarios para realizar con urgencia esas obras tan indispensables para prestigio de la Aeronáutica nacional y poderoso motor del desarrollo turístico argentino.

Misiones desea volcar sus riquezas al servicio de la República, por eso pide que se termine con el aislamiento a que ha sido condenada.

Rolando Olmedo. — *Eugenio L. Rodríguez.*

—A la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

2

COMISION BICAMERAL DE HOMENAJE AL SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE TUCUMAN Y LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar lectura a un decreto dictado por las presidencias de ambas Cámaras.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Buenos Aires, 20 de abril de 1966.

Visto que por ley 16.464 sancionada el 23 de julio de 1964 se ha fijado el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1966 al 31 de enero de 1967 para conmemorar el sesquicentenario del Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia, y

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de 1816 es la génesis del Parlamento argentino y corresponde a éste, por

ende, asociarse al jubiloso acontecimiento conmemorativo mediante la organización y realización de actos y ceremonias solemnes, acordes con la jerarquía y trascendencia de la conmemoración que adquirirá relieve universal,

El presidente del Honorable Senado y el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

Artículo 1º — Integrar una Comisión Bicameral de Homenaje al Sesquicentenario del Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia, con los señores senadores: Eduardo J. A. Gamond (Córdoba), Juan R. Aguirre Lanari (Corrientes), Santiago C. Fassi (Capital Federal), Lauro Francisco Ramírez (Chaco), Miguel Salmén (Santa Fe) y Roberto De Rege (Río Negro) y los señores diputados: Adolfo Rouzaut (Santa Fe), Fermín Garay (Entre Ríos), José Armando Caro (Salta), Carlos A. Cottonaro (Córdoba), Juan C. Achiary (La Pampa), Guillermo A. Belgrano Rawson (San Luis), José Frega (Capital Federal) y José Eduardo De Cara (Buenos Aires), debiendo actuar como secretarios de la misma los señores secretarios parlamentarios de ambas Cámaras.

Art. 2º — Adoptar las providencias pertinentes para realizar una sesión simbólica de Asamblea Legislativa, el 9 de julio del año en curso, en el solar histórico de Tucumán, donde fuera proclamada la Independencia argentina.

Art. 3º — Recomendar a la Comisión Bicameral de Homenaje, designada por el artículo 1º contemplar la posibilidad de:

- Edición de una obra que se denominará *Biblioteca de Julio*, de las características de la *Biblioteca de Mayo*, pero reducida a dos tomos como máximo, conteniendo la selección de los grandes discursos parlamentarios pronunciados entre 1816 y 1966 sobre temas relacionados con nuestra Independencia nacional;
- Organización de una exposición de los originales de la Constitución de 1853 en el Salón Azul del Honorable Congreso, como así también una muestra numismática relacionada con el Congreso de Tucumán y la Independencia argentina;
- Acuñación de una medalla conmemorativa;
- Organización de un ciclo de conferencias alusivas a los Congresos argentinos.

Art. 4º — Incluir en el presupuesto del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados las partidas necesarias para sufragar los gastos que demandará la ejecutoria de la presente resolución.

Art. 5º — La Comisión Bicameral de Homenaje podrá solicitar a las presidencias de ambas

Cámaras de adscripción temporaria de personal idóneo y/o la designación de funcionarios o empleados por tiempo determinado para quienes regiría lo preceptuado en el inciso f) del decreto 7.362/65.

Art. 6º — Comuníquese, archívese.

CARLOS H. PERETTE. ARTURO MOR ROIG.
Claudio A. Maffei. Eduardo T. Oliver.

3

MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Blanco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Blanco.

Sr. Blanco. — Habiéndose enunciado la entrada del dictamen de la Comisión de Trabajo sobre las modificaciones a la ley de contratos de trabajo, pido que se trate como primer asunto en el orden del día correspondiente a la sesión de la fecha.

Sr. Gelsi. — Pido la palabra.

Deseo recordar que por resolución de este Honorable Senado ha quedado reservado sobre la mesa de la Presidencia un proyecto que presentó sobre nombramiento de una comisión investigadora de la conducta de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Quiero saber si corresponde considerarlo ahora.

Sr. Blanco. — ¿Me permite, señor senador?

Nuestro bloque no tiene inconveniente, si el señor senador desea que se trate ese asunto, en que primero se considere el dictamen sobre contratos de trabajo y de inmediato pasemos a tratar el proyecto a que hace mención el señor senador Gelsi.

Sr. Gelsi. — Perfecto. Pero quiero concretar una cuestión parlamentaria. El proyecto no ha tenido entrada, no sé si se lo va a tratar y además hay que fundamentarlo. Ahora bien, si la Cámara decide tratarlo después, no tengo inconveniente en que así sea.

Sr. Presidente. — El señor senador Blanco ha propuesto que se trate como primer asunto el dictamen sobre contratos de empleo. Cumplimentado este aspecto, de inmediato se le daría la palabra al señor senador Gelsi para que fundamente su proyecto y se verá el giro que adopte la Cámara.

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Con respecto al proyecto presentado por el señor senador Gelsi, acerca del cual formulé pedido para que quede reservado sobre la mesa solicito que el mismo sea considerado el día miércoles de la próxima semana.

Sr. Blanco. — ¿Me permite señor senador?

Los señores senadores se refieren al proyecto sobre investigación de medidas aplicadas en la Cancillería, ¿no es así? No hay inconveniente,

de nuestra parte, para que se trate la semana que viene, en la sesión del miércoles próximo.

Sr. Ríspoli Román. — Pido la palabra.

Tengo especial interés en asistir a este debate por cuanto he sido autor de un proyecto sobre pedido de informes, hace más de dos años, al Ministerio de Relaciones Exteriores y que a pesar de haber tenido un dictamen favorable de comisión no fue nunca contestado. Como mi mandato termina el sábado próximo, de realizarse el debate en la semana que viene, no tendría oportunidad de tomar parte en él. De ahí que solicito de esta Honorable Cámara que se trate este proyecto a más tardar el viernes próximo e invitando al señor ministro a este recinto para dar personalmente los informes que se solicitan.

Sr. Presidente. — Habiendo divergencias desde el punto de vista de las fechas esta Presidencia va a seguir un procedimiento estrictamente parlamentario. En primer término se va a poner a votación la moción del señor senador Blanco y seguidamente se dará lectura al proyecto.

Sr. González Funes. — Entonces será el momento de discutir la fecha para tratarlo.

Sr. Blanco. — Nuestro bloque no tiene inconveniente en que se fije la sesión del día de mañana para que como primer asunto se trate el proyecto del señor senador Gelsi y fundamente las razones que lo abonan.

Sr. Salmén. — Coincido con la formulación expresada por el señor senador Blanco. Las razones aducidas por el señor senador Ríspoli Román son muy atendibles. Por lo tanto retiro mi moción y me adhiero a la que propone considerarlo en el día de mañana.

Sr. Presidente. — ¿El día viernes le sería lo mismo, señor senador?

Sr. Fassi. — Tal vez el viernes tengamos que considerar el proyecto sobre El Chocón-Cerros Colorados y presumo que necesitaremos todo ese día para atender ese asunto.

Sr. Presidente. — Pero es que se propone solicitar la presencia del señor ministro.

Sr. Fassi. — Eso lo vamos a discutir mañana y escucharemos la fundamentación.

Sr. Presidente. — Perfectamente.

En el día de mañana el señor Gelsi fundamentará su iniciativa y se establecerá la fecha de su tratamiento.

Se va a votar la moción del señor senador Blanco de que se trate sobre tablas el dictamen de comisión sobre reformas a la ley 11.729.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

4

CONTRATOS DE TRABAJO

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a leer el dictamen de la comisión.

Sr. Secretario (Maffei). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley en segunda revisión sobre contratos de trabajo y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja insistir en vuestra sanción.

Este dictamen pasa directamente al orden del día conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del proyecto.

Sala de la comisión, 27 de abril de 1966.

José Alberto Martínez. — Rubén V. M. Blanco. — Galileo Mancini.

En disidencia:

Mariano Fernández (h.).

Buenos Aires, 17 de marzo de 1966.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que la Honorable Cámara que presido, ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre contrato de trabajo y ha tenido a bien aceptar las correcciones a los artículos 1º; 2º; 11; 18; 21; 22; 23; 27; 35; 39, inciso 2º, apartado B; 39, inciso 3º, apartado A; 39, inciso 3º, apartado C, con excepción de la introducida en el último párrafo, que ha tenido a bien desechar; artículos 39, inciso 6º; 46; y 55; y rechazar las restantes.

Así mismo ha resuelto desechar el artículo 22 nuevo, adicionado por el Honorable Senado.

Dios guarde al señor presidente.

*ARTURO MOR ROIG.
Eduardo T. Oliver.*

Sanción del Honorable Senado

(28 de enero de 1966)

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. — Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º — Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuese su denominación, cuando una persona se obligue a prestar servicios en relación de dependencia, durante un periodo determinado o indeterminado, en forma permanente, transitorio o accidental, a cambio de un salario.

Art. 2º — El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador hace presumir la existencia del contrato de trabajo y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — En caso de duda acerca de la duración de un contrato, se interpretará que éste es de duración indeterminada.

Art. 4º — Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

- a) A los trabajadores que presten servicios en organismos dependientes de los poderes del Estado nacional, provinciales y municipales, salvo aquellos cuya relación laboral se rija por convenios colectivos de trabajo, o se encuentren, antes de la vigencia de esta ley, amparados por la legislación laboral común;
- b) A los trabajadores comprendidos en los decretos leyes: 28.169/44 (ley 12.921); 3.750/46 (ley 12.921); 326/56, y ley 13.020;
- c) A los trabajadores sujetos a contratos de ajuste marítimo.

Art. 5º — En los casos de actividades regidas por estatutos especiales, serán de aplicación las normas de la presente ley, siempre que:

- a) Se refieran a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos; o
- b) Consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

II. — Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º — El trabajador deberá prestar el servicio personalmente en la forma convenida con el empleador.

Art. 7º — El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales o convencionales, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

Art. 8º — El incumplimiento por el trabajador de los reglamentos y normas sobre disciplina, dará derecho al empleador a la aplicación de sanciones disciplinarias, consistentes en apercibimiento o suspensión. Las sanciones deberán graduarse prudentemente, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Art. 9º — El trabajador podrá impugnar la aplicación de sanciones disciplinarias. En este caso, si el empleador no acreditare la existencia de causa suficiente, estará obligado a dejar sin efecto la medida y a abonar los salarios que aquél hubiera perdido.

Art. 10. — Toda modificación de las modalidades de prestación del servicio dispuesta por el empleador y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerar rescindido el contrato y, si la medida lo perjudicara material o moralmente, al cobro de las indemnizaciones por despido injustificado.

Art. 11. — El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

A igual tarea, todos los trabajadores sin distinción de sexo percibirán igual salario, cualquiera sea la modalidad de la contratación.

Art. 12. — Los salarios, sin perjuicio de las prestaciones en especie, deberán ser abonados en moneda nacional de curso legal y se considerará nulo sin dar derecho a repetición todo pago hecho en violación de esta norma.

Art. 13. — Los salarios deberán abonarse en los siguientes plazos máximos:

- a) Cuando la remuneración es mensual, cada mes;
- b) Si la remuneración es a jornal, por pieza o medida, cada quince días o dieciséis si corresponde en el periodo mensual;
- c) En los trabajos o servicios eventuales, a la terminación de los mismos, o cada quince días si su duración fuere mayor.

Los pagos correspondientes a cada período deberán hacerse dentro de un plazo de siete días corridos desde su vencimiento. El solo transcurso de los plazos constituye en mora al empleador, sin necesidad de intimación.

Todo pago deberá hacerse en días hábiles durante las horas y en el lugar de trabajo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se venden mercaderías o bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, salvo a las personas en ellos ocupadas.

Art. 14. — Los créditos por salarios no podrán ser objeto de compensación alguna, salvo con adelantos de dinero hechos por el empleador a cuenta de aquéllos, ni sufrirán otros descuentos que los ordenados por ley o convenio colectivo, sin perjuicio de las normas sobre embargabilidad.

Art. 15. — El empleador deberá abonar al 31 de diciembre de cada año, un sueldo anual complementario. El mismo será equivalente a la dozava parte del total de salarios que por cualquier índole el trabajador haya percibido durante el año, en el plazo establecido en el artículo 13, y no podrá ser fraccionado en cuotas.

Art. 16. — Si el contrato de trabajo se extinguiere antes de finalizar el año, el empleador deberá abonar la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada por el trabajador hasta la fecha de la extinción, juntamente con los salarios que se le adeudaren y las indemnizaciones que pudieren corresponderle.

Art. 17. — Cada accidente o enfermedad inculpable que interrumpa la prestación del servicio, no afectará el derecho del trabajador de percibir sus salarios, durante un periodo de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años y de seis meses, si fuere mayor. Las recidivas de enfermedades crónicas no serán consideradas como nuevas enfermedades.

El salario que en estos casos corresponde abonar al trabajador se liquidará conforme al que percibía en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que, durante el periodo de interrupción, fueren acordados a los de su misma categoría, por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables se liquidará, en cuanto a esta parte, según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios.

Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.

Art. 18. — La falta de aviso oportuno de la enfermedad o accidente, podrá ser considerada falta de disciplina, pero no enervará el derecho del trabajador al cobro de los salarios si éste presentare certificado médico.

El trabajador deberá someterse al contralor de la enfermedad o accidente por el médico que designe el empleador. En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial, quien decidirá. Si el empleador no realizare este trámite, se estará al certificado presentado por el trabajador.

Art. 19. — El derecho del trabajador a la percepción de salarios en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el de ser indemnizado por el empleador por los daños o pérdidas patrimoniales que sufra con motivo de la prestación de servicios.

Art. 20. — Vencidos los plazos de interrupción del servicio por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a sus tareas, el empleador deberá conservarle el empleo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquéllos.

Si el trabajador, vencido el plazo de conservación del empleo no pudiese realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar. El trabajador podrá negarse a aceptar la tarea ofrecida cuando el salario que corresponda a la misma sea inferior en más del 25 % del que percibía anteriormente, con las eventuales actualizaciones o configurase una notoria disminución de categoría, y considerar extinguido el contrato con derecho a la indemnización prevista en el artículo 40, inciso 3º, apartado B.

Art. 21. — Si el empleador despidiere al trabajador, estando pendientes los plazos durante los cuales éste tiene derecho al cobro de salarios por accidente o enfermedad inculpable o a la conservación del empleo, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento del último de los plazos mencionados.

Art. 22. — Los beneficios previstos en los artículos 17 a 21 no son aplicables a los trabajadores comprendidos en la ley 12.713.

Art. 23. — Si el empleador insistiera en despedir sin justa causa a la trabajadora que acreditare mediante certificación médica estar embarazada, deberá abonarle además de las indemnizaciones por despido injustificado, una especial equivalente a tres meses de salarios, calculados sobre la base del salario vital mínimo y móvil para el trabajador sin cargas de familia.

Art. 24. — El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario o movilización o convocatorias especiales, de acuerdo con las leyes que rigen en la materia, desde la fecha de su convocatoria y hasta treinta días después de concluido el servicio.

Art. 25. — El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de vacaciones anuales con percepción de salarios, por los plazos según su antigüedad en el servicio:

- a) De seis meses hasta cinco años, quince días corridos;
- b) De cinco años hasta diez años, veinte días corridos;
- c) De diez años hasta quince años, veinticinco días corridos;
- d) De quince años hasta veinte años, treinta días corridos;

- e) De más de veinte años, treinta y cinco días corridos.

Art. 26. — El empleador deberá otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos:

- a) Cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo;
- b) Si las características especiales de una actividad determine su necesidad;
- c) Por disminución o falta de trabajo no estacionales, si ello favorece los intereses del trabajador.

La fecha de iniciación del período de vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador, con anticipación no menor de 15 días.

Art. 27. — El trabajador, para tener derecho a gozar del período completo de vacaciones que le corresponda según su antigüedad, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días laborables comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año corriente, si el beneficio se otorgase entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre; y del año inmediato anterior, si se concediese entre el 1º de enero y el 30 de abril. A tal efecto, serán computados como días trabajados los períodos de interrupción de la prestación de servicios, originados por accidentes o enfermedades inculpables.

Art. 28. — Si, vencido el plazo durante el cual deben concederse las vacaciones, el empleador no las hubiere otorgado, el trabajador podrá hacer uso de ellas, dando aviso al empleador con tres días de anticipación.

Este derecho se extinguirá el 31 de diciembre del año respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.

Art. 29. — Los salarios correspondientes al período de vacaciones deberán ser abonados al trabajador al comenzar el mismo.

Para su liquidación, se aplicarán las normas establecidas para el supuesto de interrupción de servicios por accidente o enfermedad inculpable.

Art. 30. — Sólo podrá acumularse a un período de vacaciones los días correspondientes al período inmediato anterior no gozado, aunque hubieren sido compensados mediante el pago de salarios, o indemnizados de otra manera.

Art. 31. — No podrán otorgarse vacaciones durante las interrupciones de servicio debidas a accidentes o enfermedades inculpables, ni durante el plazo de preaviso.

El accidente o enfermedad inculpable ocurrido durante el período de vacaciones, determina la suspensión de éstas, las que se completarán al producirse el alta de la causa que originó la interrupción.

Art. 32. — En caso de extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho de percibir una indemnización cuyo monto será el equivalente del importe de los salarios correspondientes a los períodos de vacaciones no gozadas. Igualmente, percibirá el importe de los salarios correspondientes a las vacaciones del año en que se produzca la extinción. Si no hubiere prestado servicios durante la mitad de los días laborables, percibirá los salarios correspondientes a las vacaciones, proporcionalmente al tiempo trabajado.

Art. 33.—Todo empleador que desarrolle su actividad, total o parcialmente, por intermedio de contratistas o subcontratistas, responderá por todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que se originen durante el tiempo que estos últimos realicen trabajos para el empleador principal y con relación a los trabajadores utilizados por los contratistas o subcontratistas a ese fin. El trabajador deberá demandar conjuntamente al contratista o subcontratista y al empleador principal. La responsabilidad de éste se hará efectiva ante la sola falta de depósito judicial, por parte del contratista o subcontratista, de la suma a que hubiere sido condenado. Sin embargo, el empleador principal podrá exonerarse de su responsabilidad si probare que, el contratista o subcontratista, han cumplido regularmente durante un período continuado de tres años anteriores al despido, sus obligaciones impositivas y previsionales del empresario.

III.—Suspensiones del contrato de trabajo

Art. 34.—Todas las suspensiones dispuestas por el empleador, para ser consideradas válidas, deberán ser notificadas por escrito al trabajador, entregándole constancia, tener plazo fijo y justa causa.

Art. 35.—Se considera que tienen justa causa, las suspensiones que se deban a falta de disminución de trabajo no imputables al empleador, o a razones disciplinarias, o a fuerza mayor, debidamente comprobadas.

Art. 36.—Las suspensiones que sean debidas a razones disciplinarias no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión.

Las suspensiones que sean debidas a falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta días en el plazo de un año, contado a partir de la primera suspensión.

En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrán extender a setenta y cinco días en el término de un año, contado de la misma manera. Cuando las suspensiones excedan de dichos plazos, el trabajador podrá considerarse despedido y tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por despido injustificado. Igual derecho tendrá, si la suspensión no le fuere notificada por escrito o no expresare plazo o causa o ésta fuere falsa, previa intimación al empleador. También tendrá derecho el trabajador al cobro de los salarios correspondientes al período de suspensión, cuando lo hubiere impugnado oportunamente, si el empleador no acreditare la existencia de la causa invocada.

Art. 37.—El trabajador sometido a proceso penal por hechos presuntamente sancionados con pena privativa de la libertad, podrá ser suspendido durante el curso de aquél, pero si recayese absolución o sobreseimiento definitivo o provisorio, tendrá derecho a la percepción de los salarios correspondientes al período de suspensión.

Art. 38.—La huelga suspende el contrato de trabajo. El empleador no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga decretada por la asociación profesional reconocida. Si el trabajador en el período de huelga cometiere actos que configuren una injuria hacia su empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización.

IV.—Transferencia del contrato de trabajo

Art. 39.—En caso de cambio del titular del establecimiento o empresa pasarán al sucesor o adquiren-

te todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Si en razón del cambio de titular se extinguiere el contrato de trabajo, tanto el primitivo titular como el nuevo quedarán solidariamente obligados por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar por sus créditos contra cualquiera de ellos o ambos.

V.—Extinción del contrato de trabajo

Art. 40.—El contrato de trabajo se extingue:

1º Por voluntad de las partes contratantes: el distracto deberá formularse por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción.

2º Por voluntad unilateral del trabajador:

A) Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama colacionado dirigido al empleador o se formule por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción o con las formalidades establecidas en el artículo 3639 del Código Civil;

B) Por culpa del empleador: el incumplimiento por el empleador de las obligaciones que la ley, el convenio colectivo de trabajo o el contrato individual ponen a su cargo, o las injurias contra la seguridad o los intereses morales o materiales del trabajador o su familia, en especial la rebaja injustificada de salarios, autorizan al trabajador a considerar rescindido el contrato por culpa del empleador. Estas injurias serán prudentemente apreciadas por los jueces, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo. En este caso, el trabajador tendrá derecho a la percepción de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por despido que será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

3º Por voluntad unilateral del empleador:

A) Por culpa del trabajador: el empleador podrá rescindir el contrato de trabajo, sin obligación de preavisar ni abonar indemnización por despido, en los siguientes casos:

a) Si el trabajador causare daños a los intereses del empleador por dolo o negligencia grave o reiterada en el desempeño de sus tareas;

b) Si el trabajador cometiera, en perjuicio del empleador, hechos calificados como delito por sentencia judicial;

c) Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones, excepto cuando fuere sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios;

d) Por las injurias del trabajador a la seguridad o a los intereses morales o materiales del empleador o su fa-

milia, que será prudentemente apreciada por los jueces teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo;

- e) Por el abandono voluntario de las tareas, previa intimación telegráfica o por instrumento público a reintegrarse al trabajo, la reiteración de inasistencias injustificadas, o los actos de indisciplina graves o reiterados, o la inhabilitación especial dictada por sentencia judicial.

- B) Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador: el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización por despido equivalente a la mitad de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si ésta fuere inferior.

Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.

El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento y sección. Los despidos en violación del orden de antigüedad serán considerados sin causa justificada, salvo que el empleador demostrara la necesidad de mantener personal menos antiguo a los efectos de facilitar la reanudación del trabajo, en el establecimiento.

- C) Sin causa justificada: el empleador que despidiera sin expresión de causa, o no probare la que hubiere invocado, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido, equivalente al importe de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior.

Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador.

En los contratos a plazo fijo o por obra determinada el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el derecho al pago de los daños y perjuicios que puedan corresponder al

trabajador por la rescisión anticipada del contrato de trabajo.

- 4º Por vencimiento del plazo o terminación de la obra; el empleador deberá otorgar el preaviso por el plazo que corresponda y abonar al trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo.
- 5º Por muerte del trabajador: el empleador deberá abonar a los derechohabientes del trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo, entendiéndose por derechohabientes a las personas enumeradas en el artículo 17 de la ley 14.370; en orden excluyente, a quienes bastará para obtener su cobro la simple acreditación del vínculo. Se deducirá del monto de esta indemnización lo que los derechohabientes perciban por seguros constituidos y tomados exclusivamente a su cargo por el empleador, salvo aquellos impuestos por norma legal o convención colectiva.
- 6º Por quiebra o concurso civil del empleador: el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización por despido establecida en el inciso 3º, apartado B), de este artículo. Si éstas fueren calificadas judicialmente como culpable o fraudulenta la indemnización será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

- 7º Por cesación o liquidación de la empresa:

- a) Por causa no imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º apartado B), de este artículo;
- b) Por causa imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado C), de este artículo.

- 8º Por jubilación del trabajador: cuando el trabajador cumpliera los extremos exigidos por las leyes de previsión para obtener jubilación ordinaria, el empleador podrá intimarlo a iniciar los trámites respectivos y le extenderá las certificaciones de servicios y aportes que corresponda.

A partir de este momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio, por el plazo máximo de un año.

Otorgado el beneficio, o cumplido el plazo de un año, se extingue el contrato.

Art. 41. — Cuando el trabajador se hubiere desempeñado en el servicio por un plazo menor de tres meses y fuere despedido sin causa justificada percibirá, como indemnización por despido, el equivalente al tercio de los salarios que haya percibido durante el tiempo de prestación de servicios.

VI. — Preaviso

Art. 42. — En los casos previstos en los incisos 2º, apartado A); 3º, apartados B) y C); 4º, 7º y 8º del artículo 40, la parte que decida dar por finalizado el contrato de trabajo deberá preavisar a la otra por los plazos establecidos a continuación:

El trabajador deberá otorgar el preaviso por el plazo de un mes.

El empleador deberá otorgar el preaviso por los siguientes plazos:

- a) Si el trabajador tuviere más de un mes y menos de cinco años de antigüedad: un mes;
- b) Si el trabajador tuviere más de cinco años de antigüedad: dos meses.

Art. 43.—La parte que omita el preaviso deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva que, para el trabajador, será igual al monto de los salarios que hubiera percibido durante el plazo del preaviso, y para el empleador, el doble de los salarios que hubiera debido abonar durante ese plazo.

Art. 44.—Los plazos correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso, que deberá hacerse por escrito.

Cuando se extinguiere el contrato sin preaviso, en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización substitutiva del preaviso deberá incrementarse con una suma igual a la que el trabajador hubiera debido percibir por salarios, entre la fecha de la extinción y el último día del mes.

Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador al trabajador podrá considerar extinguido el contrato en cualquier momento, sin perjuicio de su derecho a percibir la indemnización por despido.

Art. 45.—Las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, esta última con el incremento previsto en el artículo 44, tendrán carácter resarcitorio y no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos ni a ninguna otra contribución.

Tampoco estarán sujetas a embargos y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 46.—Durante el transcurso del plazo de preaviso subsisten las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. El trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de tres horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las tres primeras o las tres últimas de la jornada.

Art. 47.—Es nulo el preaviso notificado al trabajador que estuviere cumpliendo una suspensión, gozando de sus vacaciones o ausente por accidente, enfermedad inculpable, huelga, servicio militar o licencia por maternidad.

Art. 48.—Los accidentes y las enfermedades inculpables suspenden el período de preaviso dispuesto con anterioridad, el que continuará corriendo nuevamente cuando el trabajador estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas.

VII.—Disposiciones generales

Art. 49.—A todos los efectos emergentes del contrato de trabajo, la antigüedad se computará desde la fecha en que el trabajador inició la prestación de servicios.

En caso de contratos sucesivos entre las mismas partes se acumulará la antigüedad de cada uno de los distintos contratos a todos los efectos. En el supuesto de despido, se deducirá de la indemnización por despido lo que el trabajador hubiere percibido anteriormente por el mismo concepto.

Art. 50.—En los contratos a plazo fijo o por obra determinada la omisión de otorgar el preaviso en los plazos que corresponda dará derecho al trabajador a considerar el contrato como de plazo indeterminado.

Art. 51.—En los trabajos, que por su naturaleza o modalidad, sólo se realizan en determinados períodos del año, el contrato no se extingue por la finalización de cada uno de los períodos o temporada pero quedan suspendidas las obligaciones recíprocas de las partes, hasta el comienzo del período o temporada siguiente.

Al finalizar cada período o temporada, el empleador deberá otorgar al trabajador las vacaciones y abonarle el sueldo anual complementario correspondiente.

Art. 52.—Los empleadores están obligados a llevar un registro, numerado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el que se hará constar los nombres de cada uno de los trabajadores que contraten, la fecha de ingreso y egreso, los salarios percibidos y todos los demás datos que exige la legislación laboral vigente y que permitan una correcta evaluación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En caso de que el empleador no llevare el registro mencionado o lo hiciere en forma deficiente, estará a su cargo la prueba contraria, si el trabajador o sus derechohabientes prestan declaración sobre los hechos que debieron consignarse en él o fueren consignados en forma deficiente.

Art. 53.—En todos los casos de extinción del contrato de trabajo el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado en el que se hará constar las fechas de ingreso y egreso, la naturaleza de las tareas desempeñadas y su número de inscripción en la caja nacional de previsión social respectiva. También certificará haber efectuado el pago de los aportes jubilatorios y de todo otro del que sea agente de retención.

Art. 54.—Para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido el empleador podrá constituir una reserva deducible a los efectos del impuesto a los réditos, ingresando a ella a su opción los importes que resulten de cualquiera de los siguientes sistemas:

- 1.—El importe resultante de aplicar, sobre los salarios abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representen, en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales pagadas sobre los salarios totales abonados.

- 2.—Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo nacional a aplicar sobre los salarios totales abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo.

Los importes así reservados deberán adicionarse a la reserva ya existente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. Al fondo así formado se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por despidos.

Art. 55.—Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán precedencia a todo otro crédito, con excepción de los siguientes:

- a) Los créditos hipotecarios;
- b) Los créditos prendarios;
- c) Los créditos alimentarios;
- d) Los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor, en caso de quiebra o concurso civil.

Art. 56.—Todas las acciones emergentes del contrato de trabajo, inclusive las de indemnización por

accidentes y enfermedades profesionales, prescribirán en el plazo de cinco años durante su vigencia. Extinguido el contrato de trabajo, las acciones prescribirán en el plazo de tres años, aun aquellas que prescribirían por un término distinto por aplicación del párrafo anterior.

Art. 57. — Las intimaciones telegráficas dirigidas al empleador por el trabajador o la organización sindical de su actividad, atribuyéndole incumplimiento de obligaciones a su cargo, crearán, cuando no fueren contestadas en el plazo razonable fijado en ellas, que no será inferior a tres días hábiles, presunción de veracidad que sólo podrá ser destruida por prueba en contrario.

Art. 58. — En las actuaciones administrativas o judiciales que promuevan, los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos; y en ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de pagar si llegasen a mejorar de fortuna.

Art. 59. — Deróganse las leyes 11.729, 15.785, los artículos 45, 66 y 67 del decreto ley 33.302/45, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

VIII. — Interpretación

Art. 60. — Las disposiciones de esta ley son de orden público y establecen el mínimo de garantías irrenunciables para el trabajador, y serán interpretadas teniendo en cuenta su función protectora y su finalidad social.

Art. 61. — En caso de duda respecto del alcance de una norma legal o convencional que regla obligaciones emergentes del contrato de trabajo, se estará a aquella solución que armonice con las fuentes del derecho del trabajo, en especial las leyes de la materia y los convenios colectivos de trabajo y sus principios generales.

En tales casos deberá estarse a la interpretación que asegure mayores beneficios a los trabajadores.

Art. 62. — Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores se reputarán nulas de pleno derecho.

Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto.

Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducciones y ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras, y las segundas conservarán su validez.

IX. — Disposición transitoria

Art. 63. — Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despido injustificado producidos a partir del 15 de septiembre de 1965.

Art. 64. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS H. PERETTE.
Claudio A. Maffei.

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación**

(27 de octubre de 1965)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. — Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º — Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuere su denominación, cuando una persona se

obligue a prestar servicios, durante un período determinado o indeterminado, en forma permanente, transitoria o accidental, en relación de dependencia, a cambio de un salario.

Art. 2º — El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador, hace presumir el mutuo consentimiento y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — En caso de duda acerca de la duración de un contrato, se interpretará que éste es de duración indeterminada.

Art. 4º — Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables:

- A los trabajadores que prestan servicios en organismos dependientes de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional y a los empleados públicos de las provincias y los municipios, salvo aquellos cuya relación laboral se halle establecida en convenios colectivos de trabajo o se encuentren, antes de la fecha de su sanción, amparados por la legislación laboral común;
- A los trabajadores comprendidos en el decreto ley 326/56.

Art. 5º — En los casos de actividades regidas por estatutos especiales, serán de aplicación las normas de la presente ley, siempre que:

- Se refieran a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos;
- Consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

II. — Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º — El trabajador deberá prestar el servicio personalmente, en la forma convenida con el empleador.

Art. 7º — El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales o convencionales o a los usos y costumbres, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

Art. 8º — El incumplimiento por el trabajador de los reglamentos y normas sobre disciplina, dará derecho al empleador a la aplicación de sanciones disciplinarias, consistentes en apercibimiento o suspensión. Las sanciones deberán graduarse prudentemente, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Art. 9º — El trabajador podrá impugnar la aplicación de sanciones disciplinarias. En este caso, si el empleador no acreditare la existencia de causa suficiente, estará obligado a dejar sin efecto la medida y a abonar los salarios que aquél hubiera perdido.

Art. 10. — Toda modificación de las modalidades de prestación del servicio dispuesta por el empleador y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerar rescindido el contrato y, si la medida lo perjudicara material o moralmente, al cobro de las indemnizaciones por despido injustificado.

Art. 11. — El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.

A igual tarea corresponderá igual salario, cualquiera sea la modalidad de la contratación.

Art. 12.— Los salarios, sin perjuicio de las prestaciones en especie, deberán ser abonados en moneda nacional de curso legal y se considerará nulo sin dar derecho a repetición todo pago hecho en violación de esta norma.

Art. 13.— Los salarios deberán abonarse en los siguientes plazos:

- a) Si la forma de remuneración fuere mensual, cada mes;
- b) Si la forma de remuneración fuere a jornal, o por pieza o medida, cada quince días;
- c) En los trabajos eventuales, al terminarse el trabajo, o cada quince días si su duración fuere mayor.

Los pagos correspondientes a cada período deberán hacerse dentro del plazo de una semana desde su vencimiento. El solo transcurso de los plazos constituye en mora al empleador, sin necesidad de intimación.

Todo pago deberá hacerse en días hábiles, durante las horas y en el lugar de trabajo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se vendan mercaderías o bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, salvo a las personas en ellos ocupadas.

Art. 14.— Los créditos por salarios no podrán ser objeto de compensación alguna, salvo con adelantos en dinero hechos por el empleador a cuenta de aquéllos ni sufrirán otros descuentos que los ordenados por ley o convenio colectivo, sin perjuicio de las normas sobre embargabilidad.

Art. 15.— El empleador deberá abonar, el 31 de diciembre de cada año, un sueldo anual complementario, equivalente a la dozava parte del total de los salarios que el trabajador haya percibido durante el año, el que no podrá ser fraccionado en cuotas.

Art. 16.— Si el contrato de trabajo se extinguiere antes de finalizar el año, el empleador deberá abonar la parte proporcional del sueldo anual complementario devengada por el trabajador hasta la fecha de la extinción, juntamente con los salarios que se le adeudaren y las indemnizaciones que pudieren corresponderle.

Art. 17.— Cada accidente o enfermedad inculpa- ble que interrumpa la prestación del servicio, no afectará el derecho del trabajador de percibir sus salarios, durante un período de tres meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco años, y de seis meses, si fuere mayor. Las recidivas de enfermedades crónicas no serán consideradas como nuevas enfermedades.

El salario que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme al que percibía en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que, durante el período de interrupción, fueren acordados a los de su misma categoría, por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables se liquidará, en cuanto a esta parte, según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de recibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente

Art. 18.— La falta de aviso de la enfermedad o accidente podrá ser considerada falta de disciplina, pero no enervará el derecho del trabajador al cobro de los salarios, si éste presentare certificado médico.

Art. 19.— El derecho del trabajador a la percepción de salarios en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el de ser indemnizado por el empleador por los daños o pérdidas patrimoniales que sufra con motivo de la prestación de servicios.

Art. 20.— Vencidos los plazos de interrupción del servicio por causa de accidente o enfermedad inculpa- ble, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a sus tareas, el empleador deberá conservar- le el empleo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquéllos.

Si el trabajador, vencido el plazo de conservación del empleo, no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar, sin disminución de salario. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta última obligación, por causa no imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido igual a la prevista en el artículo 39, inciso 3º, apartado B.

Art. 21.— Si el empleador despidiere al trabajador, estando pendientes los plazos durante los cuales éste tiene derecho al cobro de salarios por accidente o enfermedad inculpa- ble o a la conservación del empleo, deberá abonarle, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el término que faltare para el vencimiento del último de los plazos mencionados.

Art. 22.— Si el empleador despidiera sin justa causa a la empleada que acreditare mediante certificación médica estar embarazada, deberá abonarle además de las indemnizaciones por despido injustificado, una especial equivalente a tres meses de salarios calculado sobre la base del salario vital mínimo y móvil para el trabajador sin cargas de familia.

Art. 23.— También deberá el empleador conservar el empleo al trabajador cuando éste deba prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario o movilización o convocatorias especiales, de acuerdo con las leyes que rigen la materia desde la fecha de su convocación y hasta treinta días después de concluido el servicio.

Art. 24.— El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de vacaciones anuales con goce de salarios, por los siguientes términos, conforme su antigüedad en el servicio:

- a) De seis meses a cinco años de antigüedad: diez días hábiles;
- b) De cinco a diez años de antigüedad: quince días hábiles;
- c) De diez a quince años de antigüedad: veinte días hábiles;
- d) De quince a veinte años de antigüedad: veinticinco días hábiles;
- e) De más de veinte años de antigüedad: treinta días hábiles.

Art. 25.— El empleador deberá otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos, cuando así lo requieran las características es-

peciales de una actividad determinada, o cuando por disminución o falta de trabajo no estacionales, ello favorezca los intereses del trabajador.

La fecha de iniciación del período de vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador, con anticipación no menor de quince días.

Art. 26. — El trabajador, para tener derecho a gozar del período completo de vacaciones que le corresponda según su antigüedad, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días laborables comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año corriente, si se otorgase entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre, y del año inmediato anterior, si se otorgase entre el 1º de enero y el 30 de abril.

El empleador no podrá otorgar vacaciones dentro del período comprendido en el artículo 25, cuando durante el transcurso del mismo el trabajador adquiriese derecho a gozar de un período completo de vacaciones o le correspondiere, de acuerdo al artículo 24 un período mayor.

Si el trabajador no hubiera alcanzado a prestar servicios durante la mitad de los días laborables del año, computado en la forma prevista en el párrafo primero, gozará de vacaciones durante un período reducido en proporción al tiempo trabajado.

Art. 27. — Si vencido el término durante el cual deben concederse las vacaciones, el empleador no las hubiere otorgado, el trabajador podrá hacer uso del período de vacaciones que le corresponda, dando aviso al empleador con tres días de anticipación. Este derecho se extinguirá el 31 de diciembre del año respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.

Art. 28. — Los salarios correspondientes al período de vacaciones deberán ser abonados al trabajador al comenzar el mismo. Para su liquidación se aplicarán las normas establecidas para el supuesto de interrupción de servicios por accidente o enfermedad inculpable.

Art. 29. — Sólo podrán acumularse a un período de vacaciones los días correspondientes a dos períodos inmediatamente anteriores no gozados, aun cuando hubieren sido compensados mediante el pago de salarios, o indemnizados de otra manera.

Art. 30. — No podrán otorgarse vacaciones durante las interrupciones de servicios debidas a accidentes o enfermedades inculpables, ni durante el preaviso.

Art. 31. — En caso de extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho de percibir una indemnización cuyo monto será el equivalente del importe de los salarios correspondientes a los períodos de vacaciones no gozadas.

Igualmente, percibirá el importe de los salarios correspondientes a las vacaciones del año en que se produzca la extinción.

Si no hubiere prestado servicios durante la mitad de los días laborables, percibirá los salarios correspondientes a las vacaciones, proporcionalmente al tiempo trabajado.

Art. 32. — Todo empleador que desarrolle su actividad, total o parcialmente, por intermedio de contratistas o subcontratistas, responderá por todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, con relación a los trabajadores que fueren contratados por los contratistas o subcontratistas.

El trabajador deberá demandar conjuntamente a ambos. La responsabilidad del empleador principal se hará efectiva ante la sola falta de depósito judicial, por parte del contratista o subcontratista, de la suma a que hubiere sido condenado.

III. — Suspensiones del contrato de trabajo

Art. 33. — Todas las suspensiones dispuestas por el empleador para ser consideradas válidas deberán ser notificadas por escrito al trabajador entregándole constancia, tener plazo fijo y justa causa.

Art. 34. — Se considera que tiene justa causa las suspensiones que se daban a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, o a razones disciplinarias, o a fuerza mayor, debidamente comprobadas.

Art. 35. — Las suspensiones que sean debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o a razones disciplinarias, no podrán exceder de treinta días en el término de un año, contado a partir de la primera suspensión.

En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrán extender a sesenta y cinco días en el término de un año, contando de la misma manera.

Cuando las suspensiones excedan de dichos plazos, el trabajador podrá considerarse despedido y tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por despido injustificado.

Igual derecho tendrá, si la suspensión no le fuere notificada por escrito o no expresare plazo o causa o ésta fuere falsa, previa intimación al empleador.

También tendrá derecho el trabajador al cobro de los salarios correspondientes al período de suspensión, cuando lo hubiere impugnado oportunamente, si el empleador no acreditare la existencia de la causa invocada.

Art. 36. — El trabajador sometido a proceso penal por hechos sancionados con pena privativa de la libertad, podrá ser suspendido durante el curso de aquél, pero si recayese absolución o sobreseimiento definitivo o provisional, tendrá derecho a la percepción de los salarios correspondientes al período de suspensión.

Art. 37. — La huelga suspende el contrato de trabajo.

El empleador, aun mediando declaración administrativa de ilegalidad, no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga, si ésta fue decretada por una asociación profesional reconocida.

IV. — Transferencia del contrato de trabajo

Art. 38. — En caso de cambio del titular del establecimiento o empresa, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Si en razón del cambio de titular se extingue el contrato de trabajo, tanto el primitivo titular como el nuevo quedarán solidariamente obligados por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar por sus créditos contra cualquiera de ellos o ambos.

V. — Extinción del contrato de trabajo

Art. 39. — El contrato de trabajo se extingue:

1º Por voluntad de las partes contratantes: el distracto deberá formularse por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción.

2º Por voluntad unilateral del trabajador:

A) Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama dirigido al empleador o se formule por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción;

B) Por culpa del empleador: el incumplimiento por el empleador de las obligaciones que la ley, el convenio colectivo de trabajo, o el contrato individual ponen a su cargo, o las injurias contra la seguridad o los intereses morales o materiales del trabajador o su familia, en especial la rebaja injustificada de salarios, autorizan al trabajador a considerar rescindido el contrato por culpa del empleador. En este caso el trabajador tendrá derecho a la percepción de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por despido, que será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C, de este artículo.

3º Por voluntad unilateral del empleador:

A) Por culpa del trabajador: el empleador podrá rescindir el contrato de trabajo, sin obligación de preavisar ni abonar indemnización por despido, en los siguientes casos:

- a) Si el trabajador causare daños a los intereses del empleador por dolo o negligencias graves o reiteradas en el desempeño de sus tareas;
- b) Si el trabajador cometiere en perjuicio del empleador hechos calificados como delitos por sentencia judicial;
- c) Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones excepto cuando fuere sobreveniente a la iniciación de la prestación de servicios;
- d) Por las injurias del trabajador a la seguridad o a los intereses morales o materiales del empleador o su familia, que será prudentemente apreciada por los jueces teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de trabajo;
- e) Por el abandono voluntario de las tareas, previa intimación telegráfica o por instrumento público a reintegrarse al trabajo, la reiteración de inasistencias injustificadas, o los actos de indisciplina graves o reiterados.

B) Por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador: el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización por despido equivalente a la mitad de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior.

Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.

El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del

establecimiento y sección. Los despidos en violación del orden de antigüedad, serán considerados sin causa justificada.

C) Sin causa justificada: el empleador que despidiera sin expresión de causa, o no probare la que hubiere invocado, deberá abonar al trabajador una indemnización por despido, equivalente al importe de su remuneración mensual por cada año de servicios o fracción mayor de tres meses, tomando como base el promedio de los salarios percibidos durante el último año, o durante todo el tiempo de la prestación de servicios, si éste fuere inferior. La indemnización no será superior a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, vigente al tiempo de la extinción, por cada año de servicios; cualquiera fuere la antigüedad, dicha indemnización nunca será inferior a dos meses normales del último salario.

Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres veces el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador.

En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el pago total de los salarios que el trabajador hubiera percibido en el caso de cumplirse el contrato.

4º Por vencimiento del plazo o terminación de la obra: el empleador deberá otorgar el preaviso por el plazo que corresponda y abonar al trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B, de este artículo.

5º Por muerte del trabajador: el empleador deberá abonar a los derechohabientes del trabajador una indemnización igual a la establecida en el inciso 3º, apartado B, de este artículo, entendiéndose por derechohabientes a las personas enumeradas en el artículo 17 de la ley 14.370, en orden excluyente, a quienes bastará para obtener su cobro la simple acreditación del vínculo. Se deducirá del monto de esta indemnización lo que los derechohabientes perciban por seguros constituidos y tomados exclusivamente a su cargo por el empleador, salvo aquellos impuestos por norma legal o convención colectiva.

6º Por quiebra del empleador: el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización por antigüedad establecida en el inciso 3º, apartado B, de este artículo. Si la quiebra fuere calificada judicialmente como culpable o fraudulenta, la indemnización será igual a la establecida en el inciso 3º, apartado C, de este artículo.

7º Por cesación o liquidación de la empresa:

- a) Por causa no imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado B, de este artículo;
- b) Por causa imputable al empleador: el trabajador percibirá la indemnización por despido prevista en el inciso 3º, apartado C, de este artículo.

8º Por jubilación del trabajador: cuando el trabajador cumpliera los extremos exigidos por las leyes de previsión para obtener jubilación ordinaria el empleador podrá intimarlo a iniciar los trámites respectivos y le extenderá las certificaciones de servicios y aportes que correspondan.

A partir de este momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio por el plazo máximo de un año.

Otorgado el beneficio o cumplido el plazo de un año, se extingue el contrato.

Art. 40.— Cuando el trabajador se hubiere desempeñado en el servicio por un término menor de tres meses y fuere despedido sin causa justificada, percibirá, como indemnización por despido, el equivalente al tercio de los salarios que haya percibido durante el tiempo de prestación de servicios.

VI. — Preaviso

Art. 41.— En los casos previstos en los incisos 2º, apartado A; 3º, apartado B y C; 4º, 7º y 8º del artículo 39, la parte que decida dar por finalizado el contrato de trabajo deberá preavisar a la otra por los plazos establecidos a continuación:

El trabajador deberá otorgar el preaviso por el plazo de un mes.

El empleador deberá otorgar el preaviso por los siguientes plazos:

- a) Si el trabajador tuviere más de un mes y y menos de tres años de antigüedad: un mes;
- b) Si el trabajador tuviere más de tres años de antigüedad: dos meses.

Art. 42.— La parte que omita el preaviso deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva que, para el trabajador, será igual al monto de los salarios que hubiera percibido durante el plazo del preaviso, y para el empleador, el doble de los salarios que hubiera debido abonar durante ese plazo.

Art. 43.— Los plazos correrán a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación del preaviso, que deberá hacerse por escrito.

Cuando se extinguiere el contrato sin preaviso, en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva del preaviso deberá incrementarse con una suma igual a la que el trabajador hubiera debido percibir por salarios, entre la fecha de la extinción y el último día del mes.

Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato en cualquier momento, sin perjuicio de su derecho a percibir la indemnización por despido.

Art. 44.— Las indemnizaciones por despido y por falta de preaviso, esta última con el incremento pre-

visto en el artículo 43, tendrán carácter resarcitorio y no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos ni a ninguna otra contribución.

Tampoco estarán sujetas a embargo y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14.

Art. 45.— Durante el transcurso del plazo de preaviso subsisten las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. El trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de tres horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las tres primeras o las tres últimas de la jornada.

Art. 46.— Es nulo el preaviso notificado al trabajador que estuviere cumpliendo una suspensión, gozando de sus vacaciones o ausente por accidente, enfermedad inculpable o huelga.

Art. 47.— Los accidentes y las enfermedades inculpables suspenden el período de preaviso dispuesto con anterioridad, el que continuará corriendo nuevamente cuando el trabajador estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas.

VII. — Disposiciones generales

Art. 48.— A todos los efectos emergentes del contrato de trabajo, la antigüedad se computará desde la fecha en que el trabajador inició la prestación de servicios.

En caso de contratos sucesivos entre las mismas partes se acumulará la antigüedad de cada uno de los distintos contratos a todos los efectos. En el supuesto de despido, se deducirá de la indemnización por despido lo que el trabajador hubiere percibido anteriormente por el mismo concepto.

Art. 49.— En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, la omisión de otorgar el preaviso con la debida anticipación, opera su conversión en contrato de plazo indeterminado.

Art. 50.— En los trabajos que, por su naturaleza o modalidad, sólo se realizan en determinados períodos del año, el contrato no se extingue por la finalización de cada uno de los períodos o temporadas, pero quedan suspendidas las obligaciones recíprocas de las partes, hasta el comienzo del período o temporada siguiente.

Al finalizar cada período o temporada, el empleador deberá otorgar al trabajador las vacaciones y abonarle el sueldo anual complementario correspondiente.

Art. 51.— Los empleadores están obligados a llevar un registro, numerado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el que se hará constar los nombres de cada uno de los trabajadores que contraten, la fecha de ingreso y egreso, los salarios percibidos y todos los demás datos que exige la legislación laboral vigente y que permitan una correcta evaluación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

En caso de que el empleador no llevare el registro mencionado o lo hiciere en forma deficiente, estará a su cargo la prueba contraria, si el trabajador o sus derechohabientes prestan declaración sobre los hechos que debieron consignarse en él o fueron consignados en forma deficiente.

Art. 52.— En todos los casos de extinción del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado en el que se hará constar las fechas de ingreso y egreso, la naturaleza de las tareas desempeñadas y su número de inscripción en la caja nacional de previsión social respec-

tiva. También certificará haber efectuado el pago de los aportes jubilatorios y de todo otro del que sea agente de retención.

Art. 53. — Para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido, el empleador podrá constituir una reserva deducible a los efectos del impuesto a los réditos, ingresando a ella a su opción los importes que resulten de cualquiera de los siguientes sistemas:

1. El importe resultante de aplicar, sobre los salarios abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representen, en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales pagadas sobre los salarios totales abonados.
2. Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo nacional a aplicar sobre los salarios totales abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo.

Los importes así reservados deberán adicionarse a la reserva ya existente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. Al fondo así formado se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por despidos.

Art. 54. — Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán precedencia a todo otro crédito, con excepción de los siguientes:

- a) Los créditos hipotecarios;
- b) Los créditos prendarios;
- c) Los alimentarios;
- d) Los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor, en caso de quiebra o concurso civil.

Art. 55. — Todas las acciones emergentes del contrato de trabajo, inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, prescribirán por el término de cinco años durante su vigencia. Extinguido el contrato de trabajo, las acciones prescribirán por el término de tres años, aun aquellas que prescribirían por un término distinto por aplicación del párrafo anterior.

Art. 56. — Las intimaciones telegráficas dirigidas al empleador por el trabajador o la organización sindical de su actividad, atribuyéndole incumplimiento de obligaciones a su cargo, crearán, cuando no fueren contestadas en el plazo razonable fijado en ellas, que no será inferior a tres días hábiles, presunción de veracidad que sólo podrá ser destruida por prueba en contrario.

Art. 57. — En las actuaciones administrativas o judiciales que promuevan, los trabajadores gozarán del beneficio de litigar sin gastos, y en ningún caso les será exigida caución real o personal para el pago de costas u honorarios o para la responsabilidad por medidas cautelares, dando sólo caución juratoria de pagar si llegasen a mejorar de fortuna.

Art. 58. — Deróganse las leyes 11.729, 15.785, los artículos 45, 66 y 67 del decreto ley 33.302/45, y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

VIII. — Interpretación

Art. 59. — Las disposiciones de esta ley son de orden público y establecen el mínimo de garantías

irrenunciables para el trabajador, y serán interpretadas teniendo en cuenta su función protectora y su finalidad social.

Art. 60. — En caso de duda respecto del alcance de una norma legal o convencional que regle obligaciones emergentes del contrato de trabajo, se estará a aquella solución que armonice con las fuentes del derecho del trabajo, en especial las leyes de la materia y los convenios colectivos de trabajo y sus principios generales.

En todos los casos deberá estarse a la interpretación que asegure mayores beneficios a los trabajadores.

Art. 61. — Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores, se reputarán nulas de pleno derecho.

Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto.

Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducción y ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras, y las segundas conservarán su validez.

IX. — Disposición transitoria

Art. 62. — Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despido injustificado producido a partir del 15 de septiembre de 1965.

Art. 63. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTURO MOR ROIG.
Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente. — En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. — Señor presidente: la Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el despacho en revisión de la Cámara de Diputados sobre el contrato de trabajo. Luego de un sereno análisis del mismo, la comisión ha entendido conveniente insistir en el proyecto que oportunamente sancionó este cuerpo.

La justificación de esta insistencia puede encontrarse en la reunión en que se trató este despacho, en la que se expusieron con amplitud y criterio general las valoraciones por las cuales se modificaban algunos artículos de la sanción primitiva de la Cámara de Diputados.

Consideramos que el despacho de la comisión del Senado se ajusta más a la realidad del país, a pesar de que muchas de las sanciones de la Cámara de Diputados tienen un sentido de valoración que nosotros asimilamos y comprendemos. Existe en el país una realidad económica que nosotros hemos atendido, y consideramos necesario llegar a esta situación, en que el Senado hace algunas limitaciones en general a la ley, a fin de que, ajustados y aclarados algunos de sus términos, los diversos sectores —trabajadores y empresarios— tengan un instrumento legal, una fuente de equilibrio y serenidad para sus relaciones contractuales.

Por estas breves razones, la comisión aconseja insistir en la sanción de este Honorable Senado.

Las consideraciones las hemos expuesto con amplitud en su oportunidad, pero estamos dispuestos a volver sobre ellas si en la discusión en particular se quiere insistir sobre cada uno de los aspectos ya tocados.

Sr. Fernández. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: evidentemente, el proyecto de ley que viene a consideración de esta Cámara, por su trascendencia en la vida social, económica y —por qué no decirlo— política del país, nos obliga a darle al mismo la importancia que realmente tiene. Y esa importancia, evidentemente, es la que ha concitado la inquietud de los legisladores del Parlamento nacional, tal como surge de los debates que las dos ramas del Congreso han efectuado alrededor de este tema sobre contrato de trabajo.

La trascendencia principalísima que reviste el mencionado proyecto de ley ha sido puesta de manifiesto muy especialmente y en forma serena y mesurada por representativos organismos de la vida gremial argentina. Nuestro bloque, señor presidente, no puede estar ausente de ninguna manera en el debate de este proyecto de ley; y es así que después de una evaluación serena y objetiva, y habiendo tenido en cuenta y sopesado las opiniones y posiciones tomadas por organismos sindicales altamente representativos de nuestro país, y también estudiado y valorado detenidamente las argumentaciones vertidas en este recinto, así como también las que se expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación, estima nuestro bloque, señor presidente, que en este momento este instrumento, esta ley laboral de gran trascendencia —como así ha sido puesto de manifiesto—, exige que se le dé concreción legislativa, y es por ello que después de haber meditado, pensado y valorado exhaustivamente toda la serie de argumentaciones y de opiniones que se han dado sobre la misma, nuestro bloque estima, y ha tomado posición en ese sentido, que debe aceptarse la sanción que viene de la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: yo esperaba que el debate tuviera características distintas en el sentido de examinar acabadamente todas y cada una de las cláusulas que han sido materia de discusión, pero la forma en que se ha realizado esta sesión y por una suerte de compromiso tácito que hace que en realidad vengamos a abundar en razones que ya han sido dadas, me inclinan a evitar un análisis exhaustivo, que podría hacerlo en este instante si ello fuera necesario, y a centrar en dos palabras el sentido de nuestra posición afirmando el voto que inicialmente diéramos, rechazando la insistencia con que se ha pronunciado la Cámara de Diputados de la Nación.

No veo motivo alguno para cambiar la sanción que diera originariamente este Senado, que si bien es cierto, en el caso particular del senador que habla, hubo de ser dado en forma apresurada, porque hacía solamente cuatro horas que había vuelto del extranjero, fue consecuencia de un estudio previo y de una exposición asentada sobre distintos puntos expuesta exhaustivamente en esa sesión por el miembro informante señor senador Martínez.

Sin perjuicio de las incompletas disidencias que expuse respecto a la sanción del Senado, que tampoco me conforma, comparándola con la de Diputados la creo más acertada, evitando algunas disposiciones que conceptúo que no sólo son contrarias a la economía nacional y, por ende, al bienestar de todos y cada uno de sus pobladores, cualquiera sea la clase social en que militan, sino que incluso pienso serenamente —despojado de todo prejuicio, que no puedo tenerlos cuando hay en juego valores tan importantes— que de insistirse en la sanción proyectada por la Cámara de Diputados, sus disposiciones habrán de incidir desfavorablemente sobre la propia clase trabajadora, a la cual todos deseamos favorecer.

Entiendo que aquí hay un problema muy serio que obliga a nuestra responsabilidad como legisladores y debemos votar a conciencia sin ninguna especulación que no tenga primordialmente en cuenta los intereses del país que integramos. Alguna vez, cuando sancionamos la derogación de la ley de jubilaciones para legisladores, dije que tenía mis dudas e incluso hasta pensaba que se iban a provocar situaciones de injusticia, pero que daba mi voto a conciencia porque quería tener la autoridad suficiente para legislar siempre sin temor a sospechas. Y éste es uno de los casos típicos en que lo hago sin temor a las críticas que puedan suscitarse, motejándonos con calificativos que por la sensibilidad que hemos demostrado aquí, son absolutamente inadmisibles y perfectamente injustos.

Yo voy a insistir en la sanción dada inicialmente por el Senado, porque entiendo que estoy defendiendo la economía del país y aun la propia situación de los trabajadores. Todo aquel factor que incida sobre nuestros costos de producción habrá de ser negativo para nuestro desenvolvimiento.

El dilema del país es claro y no hay que engañarse: necesitamos producir más y a costos competitivos en el orden internacional. Todos los días advertimos claras expresiones de las dificultades con que algunos de nuestros productos —no obstante lo privilegiado de nuestra naturaleza, de nuestro clima y de nuestro suelo— tienen para competir con otros que provienen de otras naciones que carecen de nuestros dones naturales.

Tenemos que producir y volver a ser un país altamente productor de materias primas, y aho-

ra, productor de materias industrializadas que encuentran justamente su fuente vivificadora en los productos para los que es naturalmente apto nuestro suelo. Todo aquel factor que introduzca un aumento de costos o que traiga posibilidades de alterar relaciones de estricta justicia entre las clases patronal y obrera, indiscutiblemente no sólo perjudicará a los empresarios y al país, sino a los propios intereses de la clase obrera.

Las reformas que introdujo en su oportunidad el Honorable Senado son justas y sensatas. Por esta razón vamos a insistir —teniendo en consideración todos estos valores que acabo de expresar— en la sanción que originariamente diera nuestro cuerpo.

Nada más, señor presidente.

Sr. Olmedo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Olmedo.

Sr. Olmedo. — El Movimiento Combatiente Radical considera que las dos sanciones son malas. La de la Cámara de Diputados así como la reforma del Senado de la Nación. Pero en la disyuntiva de elegir entre dos sanciones malas, vamos a optar por la que cause menos perjuicio a la economía del país, y vamos a hacerlo favorablemente por la sanción que ha dado el Senado de la Nación.

Sr. Flores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Flores.

Sr. Flores. — Como hacía notar el señor senador preopinante, en este momento es necesario optar entre una y otra de las sanciones, la de Diputados o la del Senado. A mi juicio, no responde a la realidad el sostener que ambas son malas. Sin ser perfectas tienen elementos positivos y útiles para el país y para el objetivo fundamental que persigue esta ley, que es la protección y amparo a los trabajadores argentinos.

Sin embargo, es exacto que es necesario optar por una u otra, sin ser posible, de acuerdo con el trámite constitucional del proyecto de ley, introducir modificaciones en los textos ya sancionados. Puesto a optar, es evidente para mí que es preferible la sanción de Diputados en cuanto cumplimenta mejor el objetivo de una ley de esta clase, o sea proteger a los trabajadores. Las razones que tengo para ello son dos fundamentales: una es que protege a una mayor cantidad de trabajadores, que prácticamente no se excluye a ninguna rama de trabajadores que laboran en industrias, comercios o explotaciones análogas que persigan fines de lucro.

Desde ese punto de vista me parece mejor la sanción de la Cámara de Diputados, ya que comprende a los trabajadores del campo, a los sujetos al contrato de ajuste marítimo o sea al no contener las exclusiones que han sido consignadas en la sanción del Senado, en los incisos b) y c) del artículo 49 de la ley. Y a la vez

creo que es mejor la sanción de Diputados en cuanto precisa perfectamente cuáles son los derechos de los trabajadores; los concede en una forma más completa y extensa; evita dudas sobre el alcance de los mismos. Si se compara una y otra sanción, es posible ver cómo existen en la aprobada por el Senado ciertas y varias disposiciones que parecerían indicar, tal vez sin que ése haya sido el espíritu de quienes las han sostenido, una tendencia a afectar los intereses legítimos de los trabajadores, y que responderían a una defensa excesiva de la clase empresaria, es decir, que podrían considerarse como regresivas o reaccionarias. Y como no creo que eso haya estado en el espíritu del Senado al sancionar esta disposición, es que me permito sostener con toda convicción que responderá mejor al prestigio de este cuerpo y al propósito con que ha votado esta ley sobre el contrato de trabajo, si acepta, después de la reflexión ya hecha en el tiempo transcurrido desde que se votó por primera vez el proyecto, la sanción de Diputados. Creo así, que estará mejor en la corriente actual y moderna de proteger en forma amplia, extensa y precisa los derechos de los trabajadores. Creo que estaremos dentro de lo que responde al interés del país, de conseguir, de consolidar, de impulsar, de lograr cada vez más firme una paz social, si demostramos con la sanción de este proyecto, en la forma que ha sido votada por Diputados, que se desea reconocer los derechos del trabajador en materia de contrato laboral, sin retaceos ni limitaciones de ninguna clase, tratándose de dar una protección efectiva y justa.

Es por estas razones, sin perjuicio de ampliarlas, si así fuera necesario más adelante, en el debate, que doy mi opinión en el sentido de que se acepten las modificaciones introducidas por Diputados, vale decir, que el Honorable Senado no insista en su sanción anterior.

Nada más.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de comisión.

Sr. González Funes. — La votación tiene que ser nominal a efectos de la insistencia, para que quede marcado el número de votos. Se necesitan en este caso los dos tercios.

Sr. Olmedo. — Desearía antes de la votación, que se dejara perfectamente aclarado cuál es la mayoría que necesitamos para esta sanción.

Sr. Fassi. — Ya sobre esa materia hay una jurisprudencia parlamentaria: los dos tercios de los senadores presentes, y eso ha sido mantenido aun en los períodos legislativos de los otros años.

Sr. Olmedo. — Sólo quería hacer esta aclaración, señor presidente, porque el artículo 71 de la Constitución Nacional dice las dos terceras partes de sus miembros y no aclara si son de los presentes o de la totalidad de ellos.

Sr. Fassi. — Existe jurisprudencia, y aun en la Cámara de Diputados, con su composición actual, se ha votado con ese criterio.

Sr. Olmedo. — Estoy conforme con la aclaración.

Sr. Presidente. — Y la interpretación es la que ha seguido permanentemente la Cámara de Diputados y la de Senadores, inclusive ésta.

Sr. Aguirre Lanari. — Por otra parte, señor presidente, de no ser así, significaría un privilegio para la Cámara de Diputados, y el único privilegio que ésta tiene ha sido establecido en forma taxativa cuando le concede la iniciativa, por ejemplo, en materia de impuestos.

Sr. Presidente. — Y, además, la Presidencia quiere aclarar que el artículo 71 dice: «la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros», no de la totalidad de sus miembros; y en la parte final el artículo habla de dos terceras partes de los miembros presentes.

Se va a votar nominalmente el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo que insiste en la sanción de este Honorable Senado con respecto a la reforma de la ley 11.729. Votar por «sí» significará votar por el despacho, y votar por «no» significará hacerlo en contra del mismo.

—Se practica la votación nominal.

—Votan por «sí» los señores senadores: Abdala (Felipe), Acuña (E. N.), Acuña (R. E.), Aguiar Vázquez, Aguirre Lanari, Bauducco,

Blanco, Cantoni, Castiglione, Fassi, Freytes, Gadano, Gamond, Ghiglione, González Funes, López, Lubary, Mancini, Martínez, Martínez Garbino, Martínez Saravia, Morillo, Olmedo, Rodríguez, Tardelli y Varela Díaz.

—Votan por «no» los señores senadores: Fernández, Flores y Rísoli Román.

—Al requerírsele su voto, dice el

Sr. Olmedo. — Con la aclaración efectuada, voto por «sí».

Sr. Secretario (Maffei). — Han votado veintiséis señores senadores por la afirmativa y tres señores senadores por la negativa.

Sr. Presidente. — En consecuencia, se han reunido los dos tercios de votos para la insistencia de la sanción pronunciada por esta Cámara. Corresponde por lo tanto que pase nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Es la hora 18 y 30.

ENRIQUE DILLON.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

5

APENDICE

SANCION DEL HONORABLE SENADO

Contratos de trabajo

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 3311.